



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

**Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales**

**Maestría en Derecho Penal**

**“La eficacia de la finalidad rehabilitadora en los sentenciados con penas privativas de libertad acumulativas hasta cuarenta años”.**

Trabajo de titulación previo a la  
obtención del título de  
Magister en Derecho Penal

**Autor:**

**Luis Franklin Barahona Quizhpi**  
**C.C. 0104032610**

**Director:**

**Dr. Santiago Patricio Piedra Jaramillo**  
**C.C. 0101014536**

**Cuenca – Ecuador**

**01/10/2019**



## **Resumen**

La finalidad de la rehabilitación social establecida en la Constitución de la República en su Art. 201, busca reinsertar a una persona privada de la libertad en la sociedad, pero para conocer si se cumple esta, en relación a la acumulación de penas, se realiza un análisis comparativo entre lo planteado en el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal, en la que se señala un límite de hasta 40 años, por lo tanto es más severa; a diferencia de lo que plantea el Art. 81 del Código Penal, que dispone un límite de 35 años, además en esta norma se dan reglas para realizar la acumulación de penas como: la absorción y la acumulación jurídica; cabe indicar que esta norma se aplica en base a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal. Estas situaciones jurídicas distintas llevan a reflexionar, en que medida difiere o influye, esta distinta regulación normativa sobre acumulación de las penas en la rehabilitación de los sentenciados para reinsertarlos en la sociedad y si se encuentra o no de acuerdo con el mandato constitucional.

Palabras clave: Rehabilitación. Pena. Acumulación. Comparación. Límite.



## **Abstract**

The purpose of the social rehabilitation established in the Constitution of the Republic in the article 201, it seeks to reintegrate a person deprived of freedom in society, but to know if it is fulfilled, in relation to the accumulation of penalties, a comparative analysis is performed between the established in the article 55 of the Organic Integral Criminal Code in this Code there is a maximum limit of 40 years it is more severe, in contrast of the established in the article 81 of the Criminal Code there is a limit of 35 years, in this Code there are rules for the accumulation of penalties such as: absorption and legal accumulation; is necessary to say that rule is applied based on the Third Transitory Provision of the Organic Integral Criminal Code. These different legal situations they make us think about the way that differs or influences in this different normative regulation about the accumulation of penalties in the sentenced people to reintegrate them in the society and if these are in accordance with the constitutional mandate

**Keywords:** Rehabilitation. Punishment. Accumulation. Comparison. Limit.



## ÍNDICE

Resumen .....	2
Abstract .....	3
Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Cláusula de Propiedad Intelectual.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Introducción .....	10
CAPÍTULO I.....	13
LA REHABILITACIÓN SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN .....	13
1.1 La finalidad de la rehabilitación social en la Constitución. ....	13
1.2 El principio de proporcionalidad .....	18
1.3 El principio de favorabilidad .....	23
1.4. Escuelas o teorías respecto al fin de la pena.....	27
1.4.1 Teoría Absoluta o Retribucionista .....	28
1.4.2 Teoría relativa o del Prevencionismo .....	30
CAPÍTULO II.....	33
LA ACUMULACIÓN DE LAS PENAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.....	33
2.1 Clases de penas .....	33
2.2. Sistema de acumulación de penas .....	38
2.3. Acumulación de multas .....	45
2.4. La unificación de penas .....	48
CAPITULO III.....	51
COMPARACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE PENAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, CÓDIGO PENAL Y SU INCIDENCIA EN LA REHABILITACIÓN SOCIAL .....	51
3.1. Procedimiento para la acumulación de penas.....	51



3.2 Diferencias entre la acumulación de penas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal y el Código Penal.....	56
3.3 Diferentes situaciones dadas dentro de la acumulación de penas privativas de libertad conforme a la aplicación del Código Orgánico Integral Penal y el Código Penal. ....	62
CONCLUSIONES .....	80
RECOMENDACIONES.....	82
BIBLIOGRAFÍA.....	83
ANEXOS.....	88

**Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio  
Institucional**

Luis Franklin Barahona Quizhpi en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación **"La eficacia de la finalidad rehabilitadora en los sentenciados con penas privativas de libertad acumulativas hasta cuarenta años"**, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN; reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. También lo autorizo para que, de estimarlo pertinente, realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 01 de octubre de 2019



Firma manuscrita en tinta azul sobre una línea horizontal.

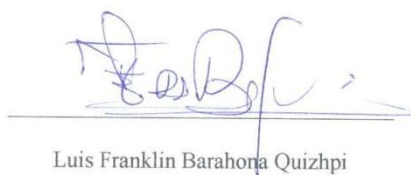
Luis Franklin Barahona Quizhpi

C.I: 0104032610

### Cláusula de Propiedad Intelectual

Luis Franklin Barahona Quizhpi, autor del trabajo de titulación **“La eficacia de la finalidad rehabilitadora en los sentenciados con penas privativas de libertad acumulativas hasta cuarenta años”**, manifiesto que la responsabilidad por los hechos, ideas, opiniones y contenidos expuestos en esta tesis corresponden al autor.

Cuenca, 01 de octubre de 2019



Firma manuscrita de Luis Franklin Barahona Quizhpi, escrita en tinta azul sobre una línea horizontal.

Luis Franklin Barahona Quizhpi

C.I: 0104032610



## **AGRADECIMIENTO**

Expreso mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Cuenca por la Formación Profesional en el campo del Derecho Penal.

Especialmente a mi tutor Doctor Patricio Piedra, por la dirección acertada al trabajo realizado.

A mis amigos y a todas las personas que estuvieron apoyando en este trabajo académico.





## **DEDICATORIA**

Este trabajo lo dedico a mí amada esposa Raquel,  
por su apoyo incondicional en este trabajo.



## Introducción

La acumulación de penas se convierte en una preocupación, la del ser humano privado de su libertad, lo que nos lleva a mirar la leyes actuales que rigen en nuestra Patria y muy concretamente, cómo la vigencia del Código Orgánico Integral Penal que modificó la acumulación de penas concebidas por el anterior Código Penal, por ello nos preguntamos: ¿Cuál de los cuerpos legales en cuanto a la acumulación de penas, cumplen con la eficacia de la finalidad rehabilitadora de los sentenciados?, según lo dispuesto en la Constitución de la República; efectuamos en esta investigación un análisis comparativo de este aspecto, para determinar tanto la norma más beneficiosa para la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad sin dejar de lado el punto de vista doctrinal acerca de su naturaleza.

Entonces siendo el Estado de Derecho aquel en el cual predominan las leyes democráticamente adoptadas, y en ella, como máxima expresión la Constitución de la República, hace que el punto de partida, de esta tesis, en cuanto a la rehabilitación social, sea su Art. 201 que plasma: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”; y, claro está, en relación con uno de sus contextos: de lo que establece el Art. 203. 3 ibídem que expresa: “3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.”, por tanto se crean los jueces de garantías penitenciarias.

Por consiguiente, se presentan, problemas al momento de realizar la acumulación de penas, sea con el Código Penal –antes 2014- y con el Código Orgánico Integral Penal, el primero que es posible su aplicación en base a la disposición Transitoria de Tercera Ibídem, pero que estos traen diferencias tanto en el límite tiempo de la acumulación de penas, mientras en el primero es de 35 años el segundo es de 40 años, ello también repercutirá en los beneficios penitenciarios a los que se haga acreedor el sentenciado.



## Universidad de Cuenca

Con estos presupuestos se procederá a verificar si la acumulación de penas establecidas en el Art. 81 del Código Penal o en el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal -en conocimiento que el primero establece varias reglas para dicha acumulación de acuerdo a la gravedad de los delitos dependiendo si se trata de delitos reprimidos con prisión o reclusión, teniendo un límite máximo de 35 años; y el segundo en que se ha dejado de lado la clase de delitos, sean de prisión o reclusión, simplemente sumando las penas sin más límite que el tiempo de 40 años-, por lo tanto el objetivo de este estudio fue analizar la eficacia de la finalidad rehabilitadora en los sentenciados con penas privativas de libertad acumuladas hasta 40 años; mediante una comparación entre el Código Orgánico Integral Penal y el Código Penal.

En este contexto, se realizó una investigación cuantitativa, mediante información proporcionado por la Directora del Consejo de la Judicatura del Azuay sobre las causas en que se han acumulado las penas, siendo 48 casos que han ingresado en el año 2017, en las Unidades Judiciales Penales de Cuenca con competencia en garantías penitenciarias; para ello se utilizó una muestra no probabilista a criterio del investigador, en la que se analizaron cuatro casos, dos que corresponden al Código Penal y los otros dos casos al Código Orgánico Integral Penal, producto de lo cual se determinó que la norma más beneficiosa para la rehabilitación social y que está de acuerdo a la Constitución de la República es la acumulación de penas establecida en el Art. 81 del Código Penal.

En este marco el presente estudio se encuentra estructurado en tres capítulos:

El primero en la Constitución de la República como suprema ley, en cuanto dispone sobre: la rehabilitación social de los sentenciados para reinsertarlos en la sociedad; de la protección de las personas privadas de la libertad y garantía de sus derechos; de la necesidad de jueces de garantías penitenciarios para garantizar sus derechos y decidir sobre sus modificaciones. Ello en estrecha relación, en el ámbito internacional, con el apartado 3 del artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de 1966.



## Universidad de Cuenca

El segundo capítulo sobre de la acumulación de penas en la legislación ecuatoriana, en cuanto a que la acumulación de ellas es una figura jurídica del derecho, en la concurrencia de infracciones y para la acumulación de las penas. Acerca de este último aspecto hasta antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en su Art. 35 establecía una única pena que debe cumplir el sentenciado por varios delitos, remitiéndonos al Art. 81 del Código Penal en el que para la acumulación de la pena determina varias reglas tomando en consideración la gravedad de los delitos, es decir, si se trata de delitos reprimidos con prisión o delitos reprimido con reclusión, las que a su vez, doctrinariamente contempla tres criterios o sistemas de acumulación de penas: la aritmética, por absorción y la jurídica, teniendo como límite máximo de la acumulación 35 años. Y a su vez sobre este asunto el Código Orgánico Integral Penal establece una sola regla y un solo criterio de acumulación de penas consistentes en la acumulación jurídica con el único límite de los 40 años.

El tercer capítulo a cerca de la comparación, de la acumulación de penas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Penal, y su incidencia en los procesos de rehabilitación social. Tomando en consideración que el Art. 35 del Código de Ejecución de Penas nos remite como ya se indicó a su vez a la acumulación de penas dispuesta en el Art. 81 del Código Penal que establece la acumulación de penas según la gravedad de los delitos esto es si son sancionados con pena de prisión o de reclusión; y, dándose tres clases de acumulación en la práctica: La acumulación material o aritmética de las penas; la absorción de las penas y la acumulación jurídica de las penas.

Se apreciará sí el sistema de acumulación de penas contenido en el Código Orgánico Integral Penal ha sido o no legislado con la finalidad de la rehabilitación dispuesto en el Art. 201 de la Constitución de la República.



## CAPÍTULO I

### LA REHABILITACIÓN SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN

#### 1.1 La finalidad de la rehabilitación social en la Constitución.

Es indispensable explicar la finalidad de la Rehabilitación Social en la Constitución, como Marco Jurídico Normativo que “organiza las instituciones del Estado y garantiza los derechos de los ciudadanos dentro de cuyos límites se mueven (libremente) las fuerzas políticas y sociales; y, los poderes públicos en el ámbito de sus competencias; dejando claro su voluntad de ser norma fundamental del ordenamiento del Estado” (López, Espín, García, et al., 2007 pp. 28, 29 y 30); por lo tanto, en la Constitución ecuatoriana respecto de los sentenciados, se observa un abandono de las tesis retribucionistas y la consagración de la finalidad resocializadora que contiene la humanización del trato, y la inclusión de la readaptación del penado como fin de la actuación penitenciaria; aunque, esto no siempre haya significado su aplicación práctica en la realidad penitenciaria.

De esta manera, la Carta Magna en beneficio de la rehabilitación de los privados de la libertad, expresa en su Art. 201, que:

El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.-El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad.

La finalidad de la Rehabilitación Social establecida en la Constitución de la República busca reinsertar a una persona privada de la libertad en la sociedad; por ello, es que la propia Constitución en su artículo 35 le otorga la calidad de grupo de atención



## Universidad de Cuenca

prioritaria quienes tienen que recibir atención preferente y especializada en el ámbito público y privado; y por esa misma razón, el Estado tiene la obligación de proveerle de un sistema laboral, educativo, cultural, etc. que promueva una transformación del recluso.

Sin embargo, resulta imposible cumplir con la reeducación y reinserción del infractor, si no existe una política pública adecuada como los planes y programas y se cuente con el personal necesario para que se logre cumplir con este fin; es decir, que en la práctica los Centros de Rehabilitación Social, deben contar con mecanismos que promuevan las habilidades y cumplan con los ejes: educativo, laboral, cultural, deportivo y salud, en vinculación familiar y social; para que finalmente la persona tengan las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad.

Esta norma nacional está en concordancia con los Instrumentos Internacionales porque regula la gestión penitenciaria; garantizando el respeto a la dignidad humana y su rehabilitación; evitando el trato no discriminatorio y motivando al mantenimiento de la disciplina sin declinar al sufrimiento que la prisión implica para el privado de libertad. Como lo manifiesta en el apartado 3 del Art. 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966): "El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados".

También, en El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Art. 10, párrafo 3, establece que la finalidad esencial de las autoridades de las cárceles en su trato a los reclusos será alentar la reforma y la readaptación social de los penados; asimismo, en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, la de la regla 81 manifiesta que "los servicios y organismos que ayudan a los reclusos puestos en libertad, a reintegrarse a la sociedad, velarán para que tengan los medios y los recursos necesarios para subsistir durante el período inmediatamente siguiente a su puesta en libertad".

De igual manera, el proceso de internacionalización de las normas penitenciarias ha adquirido especial relieve en la aprobación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos y que fueran aprobadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas



## Universidad de Cuenca

sobre Prevención del Delito y Tratamiento de los delincuentes, celebrado en Ginebra en 1955.

Entonces, es importante establecer, que los derechos y garantías en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución de la República del Ecuador, al ser de directa e inmediata aplicación, permite conocer cómo se concibe en ellos el Derecho Penitenciario; sobre todo, el tratamiento del ser humano que ha delinquido.

Por consiguiente, la Carta Magna vigente desde el 20 de octubre de 2008, es considerada conforme opina Ávila (2018): “la Constitución más avanzada y garantista que ha tenido el Ecuador, que proclama como finalidad de la pena la rehabilitación social” (p. 107). Es así, que la finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad de nuestra Constitución está en armonía con el Derecho Internacional.

Por esta razón, el estudio del delito, el de la pena, de su autor y de los medios de lucha, presentan una interrelación tan estrecha, consagrados en la Carta Magna como aspectos desarrollados por el Legislador en Leyes Penales.

Es indispensable que en la doctrina y en el lenguaje jurídico, en función de la pena, se reconozcan los términos utilizados de forma adecuada, como por ejemplo; la Constitución de la República del Ecuador hace referencia a la “rehabilitación” y “reinserción social” como la finalidad de la rehabilitación social. En cambio en los diferentes convenios internacionales se habla de “resocialización”, “readaptación social”, “reeducación” con el mismo significado.

Pues, el Diccionario de la Lengua Española; si bien, no reconoce el concepto de resocialización pero incluye la palabra socialización: “como el proceso y el resultado de socializar (la promoción de condiciones que contribuyan al desarrollo de las personas)” (RAE, 1984).

Si se tiene en cuenta la inclusión del prefijo re, se puede afirmar que resocialización consiste en volver a socializar o sea la idea refiere a la reintegración de un individuo de la sociedad, luego de que estuviera marginado por algún motivo; que por lo general, se



## Universidad de Cuenca

entiende a la sociedad como una red en la cual se enmarca a un grupo de personas. En este sentido, se dice, que un sujeto está marginado de la sociedad cuando no tiene las capacidades para desempeñarse con autonomía en la comunidad; también se entiende que una persona está afuera de la sociedad cuando atenta contra el bien común o no comparte sus valores.

Por consiguiente, la resocialización, en definitiva, es el proceso que busca que una persona pueda reintegrarse a la sociedad; suponiéndose de este modo, que la permanencia de un individuo en una cárcel forma parte de un proceso de resocialización. En una primera instancia, el condenado es castigado y apartado de la sociedad.

Pero según, la normativa tendrá que reintegrarse; por lo tanto, los responsables del Centro Penitenciario deben realizar una serie de funciones que incluya la asistencia psicológica y la capacitación para que el recluso, al recuperar la libertad pueda desarrollarse y no sea nuevamente un componente peligroso en la sociedad.

Entonces, se asume que la rehabilitación es “la acción y efecto de rehabilitar, o acción de reponer a alguien en la posesión de lo que le había sido desposeído o reintegración de derechos, dignidades, etc., de que fue privado” (RAE, 1984). Y, es en este sentido conceptual, que debe ser entendido el Art. 201 de nuestra Carta Magna (2008) cuando determina que: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas, penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”.

Y aún más, cuando explica que “El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad”.





## Universidad de Cuenca

Así, en relación a los artículos citados, el numeral segundo del Art. 203 de la Constitución de la República, que establece:

“En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación”.

Por ello, Iturralde (2018) piensa en la educación como un plan para que la reinserción social sea un éxito. Teniendo como objetivo primordial dar cumplimiento a la normativa, y a su vez, llegar a la finalidad de rehabilitar socialmente con políticas inclusivas. Basados en los lineamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así manifiesta que:

“El acceso a la educación en las cárceles es clave, no sólo por su carácter terapéutico como elemento reinsertador, resocializador y rehabilitador, sino por ser el ejercicio de un derecho que reduce la situación de vulnerabilidad, debiendo abordarse desde dos perspectivas: la inclusiva, para que los PPL ingresen a un proceso que le permita alcanzar igualdad; y social, para democratizar conocimientos fomentando la participación ciudadana cuando recuperen la libertad” (Iturralde, 2018, p. 88)

De lo expuesto, la Constitución de la República del 2008 busca la prevención especial positiva de los privados de la libertad, la que tiene que estar orientada hacia políticas penitenciarias que buscan en la práctica la reinserción de los sentenciados mientras dure la ejecución de la pena; sin embargo, es lamentable, que a pesar, de que la Carta Magna esté a favor de la rehabilitación y la reinserción de los privados de la libertad, se vea su ineficacia en la realidad penitenciaria, por no existir concordancia entre lo establecido en la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal.



## **Universidad de Cuenca**

Es decir, no existe armonía entre el principio de rehabilitación que establece la Carta Magna (que los privados de la libertad sean reinsertados a la sociedad), y lo que contradictoriamente se legisló al poner en vigencia el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal que regula la acumulación de penas hasta un máximo de 40 años (el privado de la libertad al cumplir una pena exagerada, también el beneficio de la rehabilitación no va a resultar como lo predispone en la normativa Constitucional.)

Por lo tanto, se puede hablar si es eficaz la rehabilitación del sentenciado con penas largas, pues, si a una persona de 30 años se le impone una sanción de 40 años, prácticamente es una cadena perpetua, considerando que la tasa de mortalidad en el Ecuador es hasta los 70 años aproximadamente, de tal forma resulta imposible que se reinserte en la sociedad y mucho menos que se rehabilite, pues si una persona ya conoce que va a ser privado de su libertad durante toda su vida prácticamente, carecería de motivación para cumplir con el programa de rehabilitación, y cuando sea puesto en libertad, no tendría nuevas oportunidades.

La Constitución de la República, a fin de proveer el bienestar de los privados de la libertad, resguarda el cumplimiento del beneficio de la Rehabilitación Social con la aplicación de los siguientes principios:

### **1.2 El principio de proporcionalidad**

El principio de proporcionalidad guarda una estrecha relación con el cumplimiento de los fines de la pena, lo que garantiza, al menos en teoría, que no se cometan arbitrariedades, tal como se encuentra establecido y garantizado en el Art. 76 numeral 6 de nuestra Constitución de la República cuando expresa: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”.

Por lo tanto, el principio de proporcionalidad responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación de la libertad exagerada,



## Universidad de Cuenca

limitando su uso a lo imprescindible para proteger bienes jurídicos del conglomerado social.

Cabe preguntarse cómo ello ha de entenderse y en qué medida se determina su mandato dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues bien:

“La idea de “proporcionalidad” evoca una “relación adecuada” entre cosas diversas, que la hace “razonable” por ser “armónica” y materialmente “justa”; (...), en décadas recientes, dada la compleja estructura de los ordenamientos constitucionales y de los conflictos entre sus principios integrantes, la idea de proporcionalidad se ha puesto en relieve como un recurso indispensable para adecuar bienes constitucionalmente promovidos o exigidos y de satisfacción opuesta en un caso concreto, mediante la aplicación del principio” (Sánchez, 2008, p. 225).

El principio de proporcionalidad exige que, la imposición de las penas tengan una relación valorativa con el hecho delictivo; el principio de proporcionalidad debe ser observada por el juzgador para que la pena al imponerse no resulte desproporcional al hecho delictivo cometido.

Por consiguiente, “La regla general que debe observarse es que la intensidad de la afectación en el derecho debe ser proporcionada a la gravedad del delito y a los beneficios que con ella se obtendrán en el proceso penal” (Bernal, 2013, p. 435); siendo importante que el establecimiento de la pena a la persona que se ha sentenciado sea proporcional al delito cometido que, sirve para diferenciar y sopesar las penas que cada delito tiene y las agravantes y atenuantes que pueden ser aplicadas.

La proporcionalidad a nivel internacional encontramos regulada, dentro de los pactos y convenios internacionales firmados y ratificados por el Ecuador. Así tenemos: en el Art. 5.2. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político que establece:

“No podrá admitirse restricción menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,



## Universidad de Cuenca

convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.

Entonces, los derechos fundamentales de los privados de la libertad no pueden ser restringidos por normas secundarias e inferiores a la Constitución de la República y Pactos Internacionales. También, este principio, consagrado en la Carta Magna y en el Derecho Internacional, evita la desproporcionalidad de las penas; es decir, al momento de establecerlo dentro de la tipificación en el ordenamiento penal como al aplicarse al momento de emitirse una sentencia condenatoria; así, lo expone el Art. 29, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) que plasma: “Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”

Ahora bien, dentro del estudio del principio de proporcionalidad, se debe tratar y comprender algo inherente a ella, como el principio de ponderación que es:

...un auxilio para resolver conflictos entre principios del mismo valor o jerarquía, cuya regla constitutiva puede formularse así: cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción de otro. (Prieto, 2008, p. 100)

Es preciso, considerar que el principio de proporcionalidad se encuentra compuesto por tres subprincipios: el de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; operando el cumplimiento de estos subprincipios en orden jerárquico hasta llegar al principio de proporcionalidad; cuya observancia sucesiva permite establecer si se da o no cumplimiento en sentido amplio.

Referente al principio de idoneidad o adecuación se considera como:

La medida limitativa concreta al fin perseguido con el límite impuesto al derecho fundamental, (...) Esa medida restrictiva sólo es válida si es también funcionalmente idónea; esto es, aquella medida restrictiva que en efecto



## Universidad de Cuenca

sirve para limitar el derecho por la razón que justifica la existencia del límite.  
(Villaverde, 2008, p. 184)

Por lo tanto, al privar de la libertad, al recluso hasta 40 años imponiendo una pena severa, supuestamente para precautelar a la sociedad, aun sabiendo, que el privado de la libertad es parte de la sociedad del cual fue expulsado y a su vez debe reinserirse a la misma una vez cumplida su pena. Entonces, lo idóneo sería establecer una pena prudente para que la Rehabilitación Social cumpla con su objetivo, porque la acumulación de penas establecida en el Art. 81 del Código Penal establece que las penas son basadas en la gravedad del delito.

Otro subprincipio importante, también es el de “necesidad”; pues, se aplica solo cuando es estrictamente ineludible. Y cuando, no existe otra medida menos drástica; por lo tanto, la intervención estatal es indispensable. Así, lo afirma Prieto (2008) que:

La intervención lesiva para un principio o derecho constitucional ha de ser, en tercer lugar, necesaria; esto es, ha de acreditarse que no existe otra medida que, obteniendo en términos semejantes la finalidad perseguida, resulte menos gravosa o restrictiva. Ello significa que si la satisfacción de un bien constitucional puede alcanzarse a través de una pluralidad de medidas o actuaciones, resulta exigible escoger aquella que menos perjuicios cause desde la óptica del otro principio o derecho en pugna. (p. 111)

Siendo el subprincipio de uso necesario solamente en casos especiales, el de acumular las penas de la forma que establece el Art. 81 en el Código Penal, porque jerarquiza las penas de acuerdo a su gravedad.

El tercer subprincipio es “proporcionalidad” en sentido estricto, que hace relación “al daño que se produce por la imposición de una pena no puede ser mayor al daño producido por la infracción”(Ávila, 2008, p. 319); o sea que, además de ser idónea, material y funcionalmente para limitar el derecho y hacerlo para proteger los otros derechos, bienes o intereses que imponen el límite, ha de ser necesaria e



## Universidad de Cuenca

imprescindible, en el sentido que entre las posibles sea la menos gravosa, pero suficiente para ser idónea, debe ser equitativa en el reparto de los sacrificios.

El derecho fundamental debe ser limitado en lo estrictamente necesario para asegurar la protección de aquellos otros derechos, bienes o intereses que lo limitan. Por tanto, el daño a estos últimos debe ser real o un riesgo cierto, y mayor que el que sufrirían si el derecho fundamental no se limitase. (Villaverde, 2008, p. 185)

El derecho fundamental a la libertad debe ser limitada en cuanto a su tiempo, siempre que busque proteger otro derecho que fue afectado como el de la seguridad a la ciudadanía. Y en este sentido se debe analizar si es más beneficiosa que perjudicial para proteger el otro derecho como una privación de libertad excesiva.

Los tres subprincipios conforman el principio de proporcionalidad, siendo los tres indispensables. Pues la medida ha de ser idónea en relación con el fin, y debe ser necesaria e imprescindible; es decir, que no hay otro medio. Además ha de ser proporcional, cuando existe una equilibrada ponderación entre los beneficios y perjuicios al limitar un derecho a fin de proteger otro derecho.

El principio de proporcionalidad debe ser observado para que la pena a imponerse no resulte excesiva al delito cometido. Bajo el principio de proporcionalidad piensa Ávila, que el derecho que rige la ejecución penal “tiene que ser mirado con los lentes de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No cabe ya que... sea considerado como un ente autónomo” (Ávila, 2008, p. 328).

Tanto en el derecho adjetivo y sustantivo penal, el principio de proporcionalidad, en cuanto, a la acumulación de penas, se encuentra en colisión; pues el Código Orgánico Integral Penal y el Código Penal, por referencia del Art. 35 del Código de Ejecución de Penas, dan para este asunto un trato totalmente diferente y por ello injusto. Puesto que, la acumulación de penas en el Código Orgánico Integral Penal es de hasta 40 años sin tener en cuenta la gravedad de los delitos. En cambio el Código Penal, establece la acumulación de penas tomando en consideración este aspecto, determinando tres



categorías de acumulación, en cada categoría tenido el límite, de hasta 6 años, de 15 años y de 35 años, siendo esta, la que promueve efectivamente la Rehabilitación Social.

### **1.3 El principio de favorabilidad**

Consiste en que, cuando existe un conflicto entre dos normas de la misma materia se aplica la que más favorezca al reo, aunque esta norma sea posterior. Dentro de los Derechos de Protección, en nuestra Constitución de la República (2008), hállese la del debido proceso que incluye dentro de sus garantías la favorabilidad constante como lo expresado en el numeral 5 de su Art. 76 que:

En caso de conflicto ente dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

De acuerdo a la normativa constitucional, el principio de favorabilidad se aplica en la ley que beneficie al reo; siendo esta norma retroactiva. Asimismo, el Código Orgánico Integral Penal (2014), al reconocer y desarrollar este principio, en su Art. 5 numeral 2 expresa: “Favorabilidad: En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción”.

Tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra garantizada el principio de favorabilidad, la que debe ser aplicada por el juez en un caso concreto, aún cuando la ley posterior haya derogado a la ley anterior.



## Universidad de Cuenca

Y desde el punto de la normativa internacional, relativo al principio de favorabilidad, tenemos: a la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) que en su Art.9, dice:

Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable. Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Humanos (1966), en Artículo 15.1 establece que:

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Tanto en la normativa nacional como internacional se encuentra garantizado el principio de favorabilidad, que es la aplicación de la ley más beneficiosa al sentenciado.

Entonces, dentro de este campo se refieren Bernal (2013) que:

El principio de favorabilidad es un excepción al principio de irretroactividad de la ley si bien esta “rigen a partir de su promulgación, a menos que la misma ley indique otra fecha, caso en el cual la nueva ley no puede desconocer derechos adquiridos (...) En relación con la favorabilidad, en cuanto al derecho internacional, es trascendental recordar el principio pro homine, que debe entenderse como la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana”. (...) Si en un caso se aplica la favorabilidad penal como una regla, ella establecería que está ordenado aplicar la ley penal más favorable al





## Universidad de Cuenca

procesado entre todas aquellas que en el tiempo han regulado la misma situación. (p. 470).

La favorabilidad se basa en el principio pro homine y en el principio indubio pro reo; debido a ello, en la materia de Derechos Fundamentales siempre se aplicará la norma que favorezca al reo. Por lo tanto, el principio de “favorabilidad” en el caso concreto, se aplica a las personas que ya han sido juzgadas; pues siempre, será retroactiva cuando la ley posterior sea más favorable para la persona sentenciada y suponga un beneficio para el recluso; debido a ello, se conjuga el principio “indubio pro reo”.

Doctrinariamente se considera perjudicial para el reo combinar las normas para aplicar una tercera alternativa al momento de determinar una pena. Pues, Antolisei (1960) indica que, queda fuera de toda discusión que la disposición más favorable al reo, no puede obtenerse mediante la combinación de normas, tomando una parte de una y otra parte de la otra, para amalgamarla en una tercera combinación normativa, sino que una vez establecida cuál es la norma más favorable, debe aplicarse en su totalidad. Es así, que en la actualidad se descarta la combinación de normas para aplicar la más favorable.

Debiendo tenerse presente como aclara Donna (2017) que:

El estado de derecho conlleva una prohibición del efecto retroactivo de la ley penal. Esto quiere decir que no puede ser castigada o agravada la punibilidad de una conducta mediante ley posterior al hecho. Sin embargo, sobre la base de la Constitución nacional y los pactos sobre derechos humanos incorporados en ella, el principio sólo rige en cuanto la ley sea desfavorable al imputado (...) Que sólo se admite retroactivamente la aplicación de la ley cuando sea más benigna, y aun en caso de sentencia firme (...) Se entiende que es aquella que deja al autor concreto, desde un punto de vista jurídico –material-, en mejor situación (...) También se aplica en los casos en que se determina la responsabilidad y medida de la pena (pp. 13 y 15).

El anterior estudio nos ha llevado a ver la colisión dada entre el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal y el Art. 81 del Código Penal que se aplica por mandato del



## Universidad de Cuenca

Art. 35 del Código de Ejecución de Penas, en cuanto a la acumulación de éstas; recurriendo en la práctica al principio de “favorabilidad”.

La norma secundaria del Art. 81 del Código Penal guarda relación y coherencia con el principio constitucional de “favorabilidad”; ejemplo de ello, se observa en el siguiente fallo:

En el Ecuador, la normativa constitucional y penal establece la posibilidad de que una ley posterior se aplique con efecto retroactivo en todo lo que sea más favorable al procesado, es decir, el reo puede ser beneficiado por una ley posterior a su sentencia si la misma contiene una pena menos rigurosa a la que se le fue aplicada al momento de los hechos. De ser el caso de extinguirse el delito o la pena por la acción que generó su condena, esta persona debe recuperar su libertad al entender que la necesidad de tipificar la conducta penal ya no es necesaria. Ello responde además, a una exigencia de coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, ya que si los hechos han dejado de ser desvalorados por el legislador o se les desvalora en menor medida, no tiene sentido que los ciudadanos sigan padeciendo las consecuencias de una ley que han dejado de considerarse adecuadas (Sentencia Nro.002-18-PJO-CC, 2018, p. 16).

En cuanto al principio de favorabilidad, es importante, tomar en consideración la disposición transitoria tercera del Código Orgánico Integral Penal, la misma que tiene efecto retroactivo, lo que supone la aplicación de la ley más favorable al privado de la libertad, porque se aplica el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social que nos remite a la acumulación de penas contemplada en el Art. 81 del Código Penal. Pues, es este cuerpo normativo el que se emplea al momento de la comisión del hecho delictivo o de la condena, y el que se debe utilizar durante la ejecución de la condena.

De esta manera, la acumulación de penas establecida en el Código Orgánico Integral Penal al aumentar el límite de tiempo a 40 años, es desfavorable para el privado de la libertad porque se suman las penas, ampliando el tiempo de privación de la libertad, así como los tiempos para acceder a los beneficios penitenciarios.



#### **1.4. Escuelas o teorías respecto al fin de la pena**

Es necesario tener presente, a fin de encausar al estudio de este tema, que es la pena, cual es el fundamento y el fin de la pena; así, varias escuelas tienen su concepción de la pena:

Por lo que, la Escuela Clásica es considerada como un medio de tutela jurídica cuyo fin es el restablecimiento del orden jurídico alterado por el delito, lo que se obtiene retribuyendo el mal que éste ocasiona con el mal que la pena produce (Soler, 1983, p. 319). Para esta escuela la pena es el fin mismo, para ello, esta retribuye al mal causado.

Para la Escuela Correccionalista es la reforma o corrección íntima de la voluntad perversa del delincuente, en términos que su conducta futura corresponda a una verdadera rectitud interna y no a motivo de orden externo; por ello para Roeder, el representante más destacado, la pena deja de ser un mal, porque su objeto no consiste en inspirar terror, ni en amenazar, sino en mejorar al sujeto que delinquirió, en hacer un bien tanto para el individuo como para la colectividad (Soler, 1983, p. 320). Esta escuela busca la corrección del delincuente.

Para la Escuela Positiva la pena no es un castigo, sino un medio de defensa social; pues el delito constituye un ataque a las condiciones de existencia, y por eso la reacción es necesaria; siendo su fin principal la prevención del delito, y como fines secundarios, la disminución de la alarma social que produce y la reparación de los daños (Labatut Glena, 1072, p. 276). Se busca que la pena sea útil, para defender a la sociedad y prevenir el delito.

La Doctrina del derecho protector de los criminales, del ilustre español don Pedro Dorado Montero, quien escribiera:

...acabemos con las penas como tales, con las censuras, con las críticas, con toda forma de sanción y de condena, cosas todas que responden a la desdichada concepción retributiva, que se alimenta de idea de lucha, de poder, de prepotencia y brutalidad; pongamos en lugar suyo la protección inteligente y fraternal. (Dorado Montero, De Criminología y Penología; p. 90)



## Universidad de Cuenca

Durante la ejecución de la pena. Dorado Montero, impulsa la individualización del tratamiento del recluso, para mejorarlo y adaptarlo a la vida ordenada para este tratadista el hombre podrá ser corregido y enmendado.

Por lo tanto, la pena durante su lento desarrollo ha sido considerada bajo la forma más cruel y atroz. Hasta que en 1764, como luz aparece la obra llamada “De los Delitos y las Penas” de Cessare Beccaria Bonesana que propugnó entre uno de sus principios: “Que el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ser sensible, ni deshacer un delito; sino impedir al reo hacer nuevos daños a sus conciudadanos, y apartar a los demás de cometer otros iguales” (Cañar, 2005, p. 27); y desde entonces universalmente se siente la necesidad de templar la crueldad en las legislaciones; y, en las contemporáneas el principio de la pena correccional empieza a tener eficacia.

En esta misma línea, el presente caso de estudio ahondaremos dos teorías: la primera: la retribución y la segunda: la prevención, como fundamentos de los fines de la pena y que, históricamente, han estado en pugna.

### 1.4.1 Teoría Absoluta o Retribucionista

De los objetivos y finalidades que se asignan a las penas tenemos esta teoría llamada absoluta o retribucionista: que es ésta, la más cruel y que en su antigua concepción teológica-moral fue concebida como expiación, conforme al cual el sufrimiento purifica y redime las propias culpas; es en este sentido que Martínez (2016) expresa:

Esta teoría concibe a la pena como una retribución del hecho cometido y enfatiza en el pasado, sin mirar al futuro: La pena es vista como una retribución de la culpabilidad, pues la pena siempre será la medida de la culpabilidad del sujeto infractor. Esta, tiene como máximos representantes a los filósofos (Kant, Wilhelm, Hegel, p. 621).

Entonces, esta teoría tiene como finalidad que la pena redima el mal causado por otro mal igual, porque la persona denominada culpable lo es sin recibir alguna reforma.

Al respecto de esta teoría, Roxin (1997) afirmaba:



## Universidad de Cuenca

La teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en la persecución de fin alguno socialmente útil, sino en que mediante la imposición de un mal mercedamente se retribuye, equilibra y expía la culpabilidad del autor por el hecho cometido. Se habla aquí de una teoría “absoluta” por que para ella el fin de la pena es independiente, “desvinculado” de su efecto social (lat. Absolutus-desvinculado). La concepción de la pena como retribución compensatoria realmente ya es conocida desde la antigüedad y permanece viva en la conciencia de los profanos con una cierta naturalidad; la pena debe ser justa y eso presupone que se corresponda en su duración e intensidad con la gravedad del delito, que lo compense. Detrás de la teoría de la retribución se encuentra el viejo principio del Tali3n: ojo por ojo, diente por diente... en el desarrollo del curso natural ha desvinculado la pena estatal de la venganza privada... de tal forma que el derecho a la retribuci3n pas3 a manos de una autoridad p3blica neutral, que procedía seg3n las reglas formales y por ella creaba la paz”. (p. 82)

Para Roxin, esta teorí3, trata a la pena como una retribuci3n al mal causado por otro mal de igualmente intenso. Pues 3l piensa que esta ley se asimila a la ley de Tali3n la de “ojo por ojo y diente por diente” que la aplicaba como venganza por los particulares, pero que luego la aplicaría el Estado, mediante el Derecho Penal con el Ius Puniendo.

Y dentro de esta misma línea Ávila (2013) indica:

El esquema retributivo tiene relación directa con fundamentos religiosos. El famoso “ojo por ojo, diente por diente” tiene relación con una venganza proporcionada: no se podría hacer mayor da3o que el ocasionado por el delito. La idea de la retribuci3n es que vuelve el equilibrio en las relaciones sociales. Producido un hecho da3oso, tiene que haber una consecuencia mediada en funci3n del mismo da3o. La retribuci3n fue planteada, desde la 3tica, por Kant; y desde el derecho, por Hegel. En el primer caso, la ley penal tiene un valor moral en si misma: que hay que respetar la ley y no transgredir las prohibiciones. En el segundo caso, el delito es una violencia que solo la pena contrarresta: la doble negaci3n hace una afirmaci3n” (Avila, 2013. p. 67).



## Universidad de Cuenca

Por lo tanto, Kant y Hegel representantes de la Escuela Retribucionista afirman que la pena es el fin en sí mismo, porque retribuye al daño ocasionado; es decir, que la venganza por el delito cometido mediante la intervención estatal se da, a través de la imposición de una pena severa. En esta teoría expande el poder punitivo del estado, aquí la lógica es el aumento de la pena. Por esta razón, los legisladores que se inclinan a este pensamiento pretenden abolir la delincuencia a futuro en defensa de la sociedad.

Jakobs representante del neoretribucionismo crea la doctrina del derecho penal del enemigo; que consiste en que el delincuente es el enemigo de la sociedad, diferenciándolo del derecho penal del ciudadano; por lo tanto, es imprescindible que las penas privativas de la libertad sean más rigurosas. Es decir, el endurecimiento de las penas busca la protección de los bienes jurídicos. Con esta pena impuesta por el delito sumergido en el pasado, busca prevenir delitos en lo futuro, lo que da lugar a penas desproporcionadas y la neutralización del delincuente; asimismo, se busca excluir al enemigo de toda la sociedad, donde no hay posibilidad de rehabilitación, peor de reinserción social. Lo que se traduce en el incremento de las penas privativas de la libertad.

### 1.4.2 Teoría relativa o del Prevencionismo

Esta teoría puede ser general y especial. Así:

La prevención general se dirige al conglomerado social y se realiza mediante la amenaza penal contenida en la ley, que sirve de contramotivo para contener a los que se sientan inclinados a delinquir, ya que pensar en suprimir el delito es utópico. Y la prevención especial que mira al delincuente, o sea quien violó los preceptos de la ley punitiva (...). (Labatud, 1972, p. 276)

La prevención general consiste en amenazar con la futura imposición de una pena para evitar el cometimiento de infracciones mediante la coacción psicológica. La pena o el castigo desalentarán al delincuente del cometimiento de los delitos. Aquí encontramos al derecho penal que influye positivamente en la sociedad, en las que el aseguramiento



## Universidad de Cuenca

de las normas posibilita la convivencia. Es decir, con la amenaza de la pena el legislador pretende evitar más delitos.

Asimismo, para Roxin (1997), la prevención especial es:

La posición diametralmente opuesta a la teoría de la retribución se encuentra en la interpretación de que la misión de la pena consiste únicamente en hacer desistir al autor de futuros delitos. Según ello, el fin de la pena apunta a la prevención que va dirigida al autor individual (especial). Se habla, pues, según esta interpretación, de la prevención especial como fin de la pena. La teoría de la prevención especial, al contrario de la concepción de la pena retributiva “absoluta”, es una teoría “relativa” (...) Su porta voz fue Franz. (p. 85)

Esta teoría se basa en que la pena tiene como finalidad la readaptación (la resocialización) buscando en ella la utilidad para el infractor; por consiguiente, es importante porque se puede, a través de un tratamiento al delincuente, rehabilitarlo y reinsertarlo a la sociedad durante la ejecución de la pena. Debido a ello, Donna (2017), manifiesta que:

Franz von Liszt, a quien consideramos como el autor más representativo defensor de la prevención especial, expresa que hay que partir de la idea que el derecho penal no debe ser entendido sólo como dogmática, sino que es una disciplina compuesta e intenta von Liszt demostrar que la medida de la pena (contenido y alcance, especie de castigo y magnitud de éste) determinada no por el pasado, sino por el futuro. (...) La pena es un medio para llegar al fin, pero ese medio debe adecuarse al fin” (pp. 62 y 63).

La pena busca que el delincuente pueda ser reformado y regenerado para la sociedad. La pena privativa de la libertad tiene una finalidad protectora, orientada a la transformación del recluso. Y por ende, esta contrapuesta al endurecimiento de las penas extendiéndolas



## Universidad de Cuenca

exageradamente pues con ellas imposibilita una transformación del penado para que pueda reingresar a la sociedad.

Y, en cuanto a la duración de la pena y el Derecho Penal Mínimo Ferrajoli (2009), manifiesta:

La duración máxima de la pena privativa de libertad cualquiera que sea el delito cometido, podría muy bien reducirse a corto plazo; que una reducción de este género supondría una atenuación no sólo cuantitativa sino también cualitativa; y la pena, dado que la idea de retornar a la libertad después de un breve y no tras un largo o acaso interminable período, haría sin duda más tolerable y menos alienante la reclusión; siendo necesario además un programa de minimización del derecho penal, que exige la determinación de la pena mínima necesaria. (p. 414)

Al respecto, Ferrajoli, defiende el derecho penal mínimo como la protección del más débil en este caso a los reclusos. Este autor, busca limitar el poder punitivo del Estado que establecido en un límite mínimo posibilita la rehabilitación inmediata y eficaz para el preso. Ferrajoli, no está de acuerdo con las penas máximas porque inestabiliza el trámite, aspectos emocionales en el privado de la libertad para la obtención de la rehabilitación social.

La teoría Prevencionista o Relativa es aquella que se encuentra vigente en la norma constitucional ecuatoriana vigente desde el año 2008 en su art. 201, siendo la finalidad del apena la reinserción al privado de la libertad en la sociedad. Sin embargo, el Art. 55 del COIP vigente desde el 2014, obstaculiza el tratamiento de reinserción del sentenciado, por el tiempo excesivo que el delincuente debe cumplir su pena con la acumulación de un máximo de cuarenta años. Cuando el Código Penal derogado determinaba en su art. 81 varias reglas para la acumulación de penas que está más apegada a la finalidad rehabilitadora contemplada en la constitución.





## **CAPÍTULO II**

### **LA ACUMULACIÓN DE LAS PENAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA**

#### **2.1 Clases de penas**

La pena ha sido apreciada durante el lento desarrollo de muchos siglos bajo las formas más duras y atroces. Las primeras manifestaciones de penalidad se expresan en los sacrificios humanos y en la bárbara venganza de la sangre; y su historia desde los orígenes de la civilización humana presenta una serie de suplicios escogidos con todo refinamiento de crueldad y en los cuales podría decirse que los legisladores rivalizaban en fiereza con los mismos delincuentes y algunas especies de castigos trajeron su origen en los varios bienes de que disfrutaba el hombre.



## Universidad de Cuenca

Sobre estos vino a extender su mano prepotente la autoridad social del hombre: la multa enorme y confiscación de patrimonios; la deportación; la mutilación; la marca, la infamia, la flagelación; la pérdida de su libertad y la muerte (Pessina, pág. 384). Y con la pérdida de la libertad en las cárceles hoy llamados Centros de Rehabilitación Social, surgieron diversas teorías respecto de cómo debía cumplirse, cuál debía ser el fin que lo justifique.

Para determinar si la acumulación de penas hasta 40 años cumple la finalidad rehabilitadora de los privados de la libertad, es necesario conocer cuál ha sido su progresión a lo largo de la historia y la clasificación de la pena según el bien jurídico del que se le priva al condenado; así presenta Cañar (2005) las más importantes: capitales, aflictivas, cadena perpetua, de prisión y reclusión, y pecuniarias.

Las penas capitales, para Cañar (2005) “son las que privan la vida al delincuente” (p. 505) y, aún más, estas que no sólo priva de este bien, sino aún peor de lo que éste podría tener en su futuro si viviese. Al respecto de esta tesis, Roxin, Polaino Navarrete, & Polaino Orts. (2013) expresan que:

Fundamenta la licitud de la pena de muerte en “el derecho de auto conservación” y en el “ derecho de conservar a toda la humanidad” la particularidad de la concepción de este autor es que incluso faculta a cada ciudadano a tomarse privadamente la justicia por su mano, ejecutando en nombre de la justicia natural a un sujeto peligroso (paradigmáticamente el homicida y al asesino), para evitar con ello que otro vuelva a cometer semejante delito: “cada hombre tiene el poder de castigar el crimen a fin de prevenir que vuelva a ser cometido”, esto es cada hombre, en el estado de naturaleza, tiene el poder de matar a un asesino, para disuadir a otro de cometer el mismo la misma injuria. En esos supuestos el ciudadano privado, para reestablecer el buen nombre de la Justicia puede hacer la guerra y destruir a todo delincuente peligroso “como si fuera un león, un tigre o una de esas bestias salvajes entre las cuales los hombres no pueden vivir ni encontrar seguridad” (pp. 216 y 217)



## Universidad de Cuenca

Sin embargo, la pena de muerte al delincuente, que tuvo sus inicios desde la antigüedad, es el castigo más cruel y severo, que busca el escarmiento para evitar el cometimiento de los delitos, pero gracias al desarrollo del derecho penal ha desaparecido de la legislación de los pueblos civilizados, aunque excepcionalmente hay países, que dicen serlo, pero que lo mantienen como: Los Estados Unidos de Norteamérica.

El quitarle la vida al penado es un error al momento de sentenciarlo, pues de encontrárselo inocente luego de ejecutado la condena será irreversible. Y por ello, que los pensamientos doctrinales claros y humanos contra la absurda pena de muerte impulsaron artículos en su contra, uno de ellos el Art. 66 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; que expresa: “el derecho a la inviolabilidad a la vida. No habrá pena de muerte” (2008). Estando proscrita por nuestra constitución por atentar contra el derecho fundamental a la vida por ser esta una violación a los derechos humanos.

Entonces, es necesario tratar la pena de muerte que aunque cruel todavía se aplica en varias legislaciones sin embargo ya no se aplica en nuestra legislación. Así:

La pena de muerte es irreparable, cruel y clasista, que no cumple los fines que todo castigo útil debe satisfacer, puesto que las leyes penales no pueden perseguir más que tres objetivos: la enmienda del delincuente, el resarcimiento de la víctima y el interés de la sociedad. Por lo que resulta obvio que no es quitando la vida al culpable como se le puede corregir y hacer mejor. (Prieto, 2007, p. 156).

Por tanto, esta clase de pena es inútil para el fin rehabilitador que persigue la Constitución de la República del Ecuador.

En cuanto a las penas aflictivas son las que causan físicamente sufrimiento al delincuente; es decir, la que procura alguna amargura sin quitarle la vida. “Carrara decía que se llaman aflictivas las penas que hacen sufrir físicamente al culpable sin llegarle a quitarle la vida. En otras palabras son las que tienen como fin causar congoja o sufrimiento”. (Cañar, 2004, p.525). Pena que al igual que la anterior, la pena de muerte, está proscrita en nuestra legislación.



## Universidad de Cuenca

En cuanto, a las penas aflictivas tenemos la mutilación y la marca al delincuente; estando esta clase de penas proscritas por nuestra Carta Magna, que en su Art. 66 expresa:

Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; y, c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

De acuerdo, al precepto constitucional, el derecho a la integridad física evita que a una persona se le aplique una pena que tortura y un trato que afecte la dignidad humana, sea esta física o que atente la integridad psíquica que impida la conservación de las habilidades emocionales e intelectuales. La prohibición es absoluta, la pena debe preservar el cuerpo y la mente de las personas sancionadas por el cometimiento de un delito, pues su integridad física, psíquica, moral y sexual es inherente a la dignidad del ser humano.

En este orden de ideas, sobre las clases de pena continuamos con la cadena perpetua, que se inclina por la teoría retributiva, en el que el aislamiento del sentenciado de la sociedad es el fin de la pena en sí misma, en este sentido:

...la cadena perpetua, como su nombre lo indica, es pena carcelaria para siempre, y por eso, tiene carácter eliminatorio volviendo al hombre esclavo o prisionero perpetuo de la sociedad... se interroga “¿Es justa... la imposición de penas perpetuas? ¿Puede decirse con derecho: por mucho que vivas, por mucho que expíes, nunca será bastante tu padecimiento, nunca terminará ni se dará por acabada tu expiación?” (Cañar, 2005, p. 530).

Clase de pena que por ser alejada de la concepción prevencionista que es la que propugna nuestra Constitución esta proscrita por no permitir la rehabilitación social que implica volver a la sociedad de la que fue aislada, ya que continuará separada de ella hasta su muerte, más aun generando graves trastornos de la personalidad degradando su dignidad como ser humano.



## Universidad de Cuenca

En la siguiente clasificación, de las penas de prisión y reclusión se da un avance, pues, al ser privativas de libertad con los límites que establece la ley, no es indefinida como la anterior de pena de cadena perpetua, pues, “la pena de prisión tiene la idea de condena y trabajo; y, la reclusión en donde domina la idea del encerramiento. Siendo una de las grandes cualidades de estas penas que recaen sobre la libertad, el de ser extraordinariamente divisibles”. (Pacheco, 1888, p. 322). Es aquella que se inclina por la corriente prevencionista que sigue nuestra Constitución, pues la finalidad de la misma es que la privación de la libertad sea cuantificada por el tiempo necesario para reinsertar al sentenciado a la sociedad.

Y en cuanto a la cuantificación y la individualización de la pena Zaffaroni (2008) expresa:

...la agencia judicial debe permitir que se ejerce en cada uno de los casos de criminalización secundaria sometida a su conocimiento la cuantificación de la pena que constituye la coronación del esfuerzo de contención del ejercicio del poder punitivo que incumbe al derecho penal; y, que la fijación de límites mínimos en las escalas legislativas penales se explica mediante la máxima utilitarista de que la ventaja del delito no debe superar la desventaja de la pena; siendo ella, la pena, una tasa que posibilitaría la función disuasoria, basada sobre el supuesto de que el ser humano actúa siempre racionalmente y, antes de cometer cualquier delito formula un cálculo de rentabilidad. (Zaffaroni, 2008, p. 995)

Aquí se fijan los límites mínimos y máximos que la ley determina para cada delito. La pena de prisión es para aquellos delitos leves; mientras que la pena de reclusión es para aquellos delitos más graves.

En la legislación Ecuatoriana, según el Código Penal, en su Art. 51, las penas privativas de la libertad eran de prisión y reclusión. La de reclusión se divide en menor y mayor; la primera se divide en ordinaria y extraordinaria; y la segunda en ordinaria, extraordinaria y especial.



## **Universidad de Cuenca**

La importancia de esta clasificación y subclasificación es para determinar la pena única en el caso de concurrencia de infracciones; ya que, el establecimiento de una pena única obedece a las reglas que se encuentran establecidas en el Art. 81 del Código Penal y estas a su vez se basan en la clasificación y subclasificación de las penas de prisión y reclusión. Esta forma de clasificar, se la realizaba en el Código Penal, que fue abolida conforme a las disposiciones derogatorias primera del Código Orgánico Integral Penal, que expresa: “Deróguese el Código Penal, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 147 de 22 de enero de 1971 y todas sus reformas posteriores”.

Por lo que, desaparece esta forma de clasificación de la pena de prisión y reclusión que tenía su sentido en el nivel de la gravedad de los delitos. Además, este cuerpo legal establecía las diferentes reglas en cuanto a la acumulación de penas, como los siguientes: 1.- Si concurren delitos sancionados prisión, las penas se acumulan hasta seis años. 2.- Cuando concurren delitos sancionados con reclusión o con prisión y reclusión las penas son absorbidas por la pena del delito más grave. 3.- Cuando concurren delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se acumularán las penas por un máximo de 35 años.

Por el contrario, el Código Orgánico Integral Penal (2014) en su Art. 19 manifiesta otro modo de clasificar las penas: en delitos y contravenciones. Entonces, la clasificación del Código Penal sobre las penas peculiares del delito fue derogada, recalando que aún son utilizadas en la acumulación de penas en los casos de los sentenciados hasta el 2014, esto en aplicación de la disposición transitoria tercera del Código Orgánico Integral Penal.

Actualmente la Clasificación en infracciones aplica a las penas en forma general; es decir, no considera la gravedad de los delitos para condenar; ya que la acumulación de penas determinadas en el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual ocurre una sola clase de acumulación al sumar todas las penas con el límite único de los 40 años

### **2.2. Sistema de acumulación de penas**



## Universidad de Cuenca

La acumulación de penas se da en el caso del concurso real de infracciones. Y según, Cañar (2005) el concurso real se da cuando el mismo agente realiza uno o varios actos encaminados a fines distintos y que ocasionan diversas infracciones completamente independientes unas de otras, teniendo una independencia fáctica de los hechos que lo diferencia del concurso ideal. En el concurso real de delitos, por cada delito cometido tiene su propia pena, pero, es necesario que el sentenciado conozca la pena que cumple, y por ello, se tiene que determinar la pena única que debe cumplir el sentenciado.

Para el caso del concurso real de infracciones, cuando se ha cometido varios delitos autónomos e independientes, las penas para cada uno de aquellos se debe acumular con el fin de establecer una pena única.

Doctrinariamente se ha establecido tres sistemas de acumulación de penas:

Primero.- El de la acumulación material de las penas, en el que se suman todas las sentencias condenatorias por la que el reo fue sentenciado, en la que el tiempo de duración de la pena puede incluso superar el tiempo de vida del recluso, por ello:

...cada delito tiene una pena; se suman las penas de todos los delitos cometidos y esa será la pena que se imponga, sin límite alguno. Con este criterio las penas pueden llegar en cierto caso a exceder la duración de una vida y aún a centenares de años. Este es el sistema más severo, aunque es sostenido por quienes son partidarios de dar al sistema la mayor dureza posible. (Régimen Penal Ecuatoriano, 2007, p. 396)

Respecto a la acumulación material de las penas, según Cañar (2005) llamaba la solución más primitiva, en la que los distintos delitos son sancionados como hechos independientes y el autor sufre la suma de las penas correspondientes, en virtud de la justicia retributiva en el que el culpable de varios delitos debe ser castigado tantas veces cuantas ha violado la ley, pero nos llevaría a infringirle el dolor de la segunda pena a un reo ya abatido por la primera, cuya agregación multiplica la intensidad de los dolores, hasta el punto de hacerlos intolerables; en la breve vida del hombre, varios períodos de tiempo pueden hacer perpetua la pena que debería ser temporal.



## Universidad de Cuenca

Este tipo de acumulación nos lleva la suma aritmética de todas las penas que ha recibido el recluso, pero esta no tiene límite de tiempo. En este sentido Cuerda (2011) opina que:

La extraordinaria duración de algunas penas individuales puede dar lugar a que determinados reclusos, en función de su edad y de sus circunstancias personales en relación con el tratamiento penitenciario, estén condenados en la práctica a una verdadera privación perpetua de la libertad; y esto es aún más probable cuando el recluso ha sido condenado por varios hechos que se encuentran en concurso real. (p. 21).

Para este autor, la acumulación material de penas, procede cuando el recluso ha sufrido dos o más sentencias condenatorias, en la que se tienen que sumar las mismas, para llegar a una sola condena, pues considera que frente al incremento de la delincuencia se ve la necesidad que el sentenciado cumpla todas las penas por las que fue sentenciado, mediante el uso del sistema penal. Por el contrario, sobre este sistema Zambrano (2014) precisa que:

...hoy enfrentamos procesos de criminalización cuya impronta es el aumento de penas a pesar que la experiencia pone en evidencia que los Estados occidentales van incorporando una cultura de emergencia que hace metástasis en todo el sistema penal, con la respuesta fácil y de primera mano que es el incremento de las penas y el recorte de las garantías procesales y de beneficios de excarcelación, que tiene un gran efecto mediático”. (p. 6)

En la actualidad, la respuesta frente al incremento de la criminalidad se da a través del sistema penal del “Ius Puniendi” del Estado endureciendo las penas, lo cual llevará sin duda a las pocas posibilidades de que el sentenciado en un corto tiempo pueda ingresar en el sistema progresivo y obtener un beneficio penitenciario.

Este sistema retribucionista, va contra la finalidad rehabilitadora establecida en el Art. 201 de la Constitución de la República del Ecuador, al mismo tiempo que es ineficaz, pues no existe certeza de la disminución de la delincuencia con el incremento de las penas. Por ello, Pablos de Molina (2015) afirma que el:





## Universidad de Cuenca

...incremento de las tasas de delincuencia durante las últimas décadas y el de la actitud punitiva de una sociedad alarmada e insegura como la de nuestro tiempo... explica una confianza injustificada en la eficacia del castigo, en la severidad de la pena, y en políticas penales de desmedido rigor (zero-tolerance); (...) no hay constancia de que el rigor de la pena o el aumento de las cuotas de encarcelamiento reduzcan las tasas de la criminalidad y eviten el delito” (pp.453 y 454).

Coincidiendo con lo manifestado por Pablos de Molina, en nuestro país se ha dado el endurecimiento de las penas en la última década, como por ejemplo: el femicidio tipificado y sancionado en el Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal (2014) que tiene una pena de privativa libertad de “veintidós a veintiséis años”; sin embargo, no se ha reducido las tasas de criminalidad.

Por el contrario, se ha dado un crecimiento de la tasa de encarcelamiento, del número de privados de la libertad, llegando al hacinamiento; lo cual, puede ser visto desde la realidad penitenciaria que no ha cambiado, con lo que, se pone nuevamente en entredicho la rehabilitación de los reclusos.

Estamos “frente a la escuela retributiva, que la única finalidad es devolver un mal causado con la imposición de una pena severa, reduciendo a las instituciones penitenciarias a un mero depósito de personas sin un horizonte posible ni deseable de retorno a la sociedad”. (Morás, 2016).

Entonces la duración del encarcelamiento va a impedir que se dé una verdadera rehabilitación, en la que los reclusos van a adoptar la subcultura carcelaria que tienen sus propios códigos y normas, siendo esta la manera de vivir en los centros penitenciarios. Debido a ello, Cañar (2005) dice que: “la sociedad humana no tiene el derecho a hacer sufrir irracional y despiadadamente a sus miembros: pues, no es la severidad de las penas las que dulcifican las costumbres y hace a los hombres mejores para con sus semejantes”. (p. 504), ya que el incremento y la severidad de las penas no va a disminuir los delitos.



## Universidad de Cuenca

Segundo.- El de absorción, sistema conforme al cual la pena del delito mayor está ya comprendido en la pena menor. Respecto a la absorción del delito más grave absorbe a las penas de los demás delitos, y esa será la que debe cumplir el condenado”. (Régimen Penal Ecuatoriano, 2007, p. 396). Conforme al cual la pena del delito mayor está ya comprendido en la pena menor, prescindiendo de las demás penas, siendo esta la más benigna.

Este criterio doctrinario, ya en la práctica, se encuentra recogido en el Art. 81 del Código Penal que establece: en su regla 2: “Cuando concurra un delito reprimido con reclusión con delitos reprimidos con prisión correccional o una o más contravenciones, se impondrá la pena señalada al delito más grave”. También lo encontramos en el primer inciso de la regla 3: “Cuando concurren varios delitos reprimidos con reclusión se impondrá la pena mayor”. Pese a que el Código Penal se encuentra derogado, sin embargo se aplica el Art. 81 en base a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, que establece:

“Los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código seguirán tramitándose cuando entre en vigencia este cuando seguirán sustanciándose conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión”.

Mediante este sistema la pena mayor absorbe a la pena menor, resultando más favorable para el privado de libertad; sin embargo, este método ya no se aplica en el Código Orgánico Integral Penal vigente.

El Tercero.- que trata de “el de aspersión o acumulación jurídica, por oposición a la acumulación material. En la acumulación jurídica”: “Las penas se acumulan, pero en ningún caso se puede sobrepasar de los límites máximos establecidos en la ley. Este sistema quiere encontrar un punto de equilibrio entre los extremos de severidad y benignidad de los otros criterios” (Régimen Penal Ecuatoriano, 2007, p. 396). En este sistema se suman las penas como en el sistema de acumulación material con la gran diferencia que la ley establece límites en cuanto al tiempo de duración.



## Universidad de Cuenca

Para que no quede duda respecto de la acumulación jurídica o aspersion Oliver (2012) expone:

Las penas de varios delitos deber ser mayores que la de uno solo y ser aumentadas en relación al número y entidad de los diversos delitos cometidos, pero sin llegar a la suma aritmética. Generalmente se toma la pena correspondiente al más grave de los delitos perpetrados por el sujeto y se le aumenta prudencialmente, según el numero e importancia de los demás” (p. 251).

Este criterio doctrinario, en la práctica, se encuentra recogido en el Art. 81 del Código Penal en su regla 1: “Si concurren varios delitos reprimidos con penas correccionales, o uno o más de estos delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las multas y penas de prisión correccional y de policía; pero de manera que la multa no pueda exceder del doble de la más rigurosa; y la prisión correccional, de seis años”; y, en el inciso segundo de la regla 3: “Cuando concurren varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se acumularán las penas por un máximo de treinta y cinco años”. Pese a que el Código Penal se encuentra derogado; sin embargo se aplica estas reglas del Art. 81 en base a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal.

En cuanto a la acumulación de penas en el Art. 81 del Código Penal, en la regla 1 se puede acumular todas las penas de prisión hasta seis años, allí la importancia de la clasificación de las penas de prisión y reclusión, por cuanto al ser las de prisión de menor gravedad se establece un límite más corto. En la regla 2 se puede acumular todas las penas siempre y cuando incurran en él varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, en la cual el límite, a diferencia de los delitos de prisión, al ser más graves se incrementa a un máximo de 35 años.

Referente a la acumulación jurídica, y a los límites que ésta debe, al respecto, Muñoz Conde y García Arán (2015), expresan que:

Incluso en los delitos más graves hay unos límites máximos que no deben sobrepasarse, de lo contrario, llegaríamos a aplicar penas de cientos de años de



## Universidad de Cuenca

cárcel, multas de cuantías exorbitantes, etc., de imposible cumplimiento. Es, por ello, lógico que se arbitren determinados criterios, con los que, combinando los diversos principios antes citados, se llega a penas proporcionadas a la valoración global que merecen las diversas acciones y delitos cometidos y a su posible cumplimiento efectivo ( p. 468).

Por otro lado, la acumulación jurídica también se encuentra establecida en el Código Orgánico Integral Penal vigente, así pues, procede en el concurso real de las infracciones, en la que se suman las penas hasta el límite establecida en este Código; con el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal (2014) que establece: “Acumulación de penas.- La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta años. Las multas se acumulan hasta el doble de la máxima impuesta”. Esta norma, establece la acumulación de penas cuyo límite es el siguiente: a) En la acumulación de penas privativas de la libertad en ningún caso excederán de 40 años, y, b). En cuanto a las penas pecuniarias, las multas se acumularan hasta el doble de la máxima.

En cuanto a la acumulación jurídica de las penas, establecida en la actual normativa Código Orgánico Integral Penal, es excesiva y severa; Con ello, coincide García (2014) quien manifiesta:

(...) referente al concurso de delitos, en los mismos donde se determinó que la pena privativa de libertad de 40 años no garantiza la finalidad de la pena impuesta en el marco constitucional (art. 201) como política de estado, tanto así que una pena de 40 años impuesta a una persona mayor de 30 años de edad, resulta una prisión perpetua de facto o pena de muerte con torturas psicológicas. (pp. 631 y 632)

En el Código Orgánico Integral Penal al acumularse las penas hasta un máximo de cuarenta años, existe una descomunal prolongación de la privación de la libertad, donde se profundiza su marginación, lo que imposibilita la resocialización del privado de la libertad que busca la Constitución de la Republica en su Art. 201; por lo tanto, carecen de eficacia.



### **2.3. Acumulación de multas**

Las penas pecuniarias, una de ellas es: la multa. Es una sanción pecuniaria al reo sentenciado por un delito. Al respecto Ferrajoli (2009) manifiesta que las penas patrimoniales son las que privan de bienes o potestades económicas; y con las penas privativas de la libertad son todas configurables; en efecto golpeando en igual medida y con el mismo tipo de sufrimiento, al margen de las condiciones personales del reo y sobre la base solamente del tipo de delito. Se dice que es igual para todos y se aplica según el delito.

Lo cual, se discrepa y al respecto Cañar (2005) manifiesta que:

...si un castigo personal, la muerte, la cadena, el presidio, afecta o de un mismo modo o de un modo algo parecido a todos los hombres, un castigo pecuniario es lo más desigual que puede concebirse, cuando, idéntico en su expresión, recae sobre dos personas de diferentes riquezas. La pena de muerte y la prisión priva de la vida o de la libertad al poderoso y al necesitado, y la vida y la libertad es igual para ellos; mas una multa de mil reales hará sonreír a nuestros Cresos de la Bolsa, y es la confiscación para un menestral, que, ni aun vendiendo todos sus bienes, llegaría a juntarla”. (p. 553)

Y la multa “es la exigencia que se le impone al condenado a pagar al Estado una cantidad de dinero, la que se establece al momento de dictar la sentencia por parte del juez de manera que debe pagarse de forma íntegra e inmediata, siendo exigible al quedar ejecutoriada la sentencia” (García , 2015, p. 664). Cuando la sentencia se encuentra ejecutoriada, también se le notifica que debe cancelar la multa impuesta en sentencia.

Pena respecto a la cual, manifiesta Muñoz Conde & García que:

...ha estado presente en la mayoría de sistemas jurídicos épocas históricas remotas, (...) sin embargo, el siglo XX conoció un nuevo auge de la pena de multa, de la que se destacan sus ventajas, sin embargo, tales ventajas van acompañadas, de ciertos inconvenientes: la pena de multa, a todas luces,



intimida menos que la prisión y, en muchos casos, puede resultar ineficaz desde el punto de vista preventivo; por otra parte, plantea problemas en relación al principio de personalidad de las penas, en la medida en que la disminución del patrimonio del condenado no sólo le afecta a él, sino también a su familia, (...) para los condenados que disponen de medios económicos resulta mucho menos gravosa que para quienes no los poseen y ello deja planteado el problema de la respuesta a adoptar en casos de insolvencia o impago”. (Muñoz Conde & García, 2015, p. 521)

Para el caso que no se cancele la multa impuesta muchas legislaciones disponen se pague con la pena de la privación de libertad; por ello, para estos casos se debe considerar lo establecido en los Pactos y Convenios Internacionales al respecto, así: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) en su Art. 7. 7 expresa: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios”; además, tenemos el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Art. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Y en lo relativo a la pena pecuniaria de la multa dentro de nuestra legislación, tenemos: la de la Constitución de la República (2008) que en su Art. 66.29.c. manifiesta: “Los derechos de libertad también incluyen: c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto las pensiones alimenticias”. Lo que significa que no existe prisión por deudas, en este caso, por no pagar la multa impuesta en sentencia, no significa que debe cumplir más tiempo de pena; sin embargo la norma constitucional establece como excepción en el caso de alimentos.

El Código Orgánico Integral Penal (2014) en el Art. 55 expresa que: “Las multas, se acumulan hasta el doble de la máxima impuesta”, y en el Art. 71 la escala de multas de acuerdo a la pena privativa de libertad; también estaba en el Código Penal (1971) en el Art. 63 que expresaba “Las multas por delitos pertenecen al Fisco; y serán impuestas a cada uno de los condenados por una misma infracción. La multa se cobrará por apremio



## Universidad de Cuenca

real.”; y, de acuerdo al Art. 81 Ibídem se establecía la forma de acumular las penas incluidas las multas; por lo tanto, en las dos normativas se regulaban lo referente a la acumulación de multas.

En el caso de las multas que sean impuestas por el juez en el actual Código Orgánico Integral Penal que poseemos, a los privados de la libertad, el Consejo de la Judicatura los puede cobrar a través del trámite de coactiva, sin que por ningún motivo esto implique que se afecte o se limite al derecho de libertad de los sentenciados.

En todas las sentencias condenatorias se establece la multa que debe cancelar el privado de libertad y se la fija de acuerdo al salario básico unificado vigente; sin embargo, en cuanto a la acumulación de las penas las multas se suman hasta el doble de la máxima impuesta, lo que hace que en la práctica se vuelvan impagables por parte de los sentenciados, pues no disponen de recursos necesarios al encontrarse privados de la libertad.

Procedimiento para el cobro.- Ejecutoriado el fallo condenatorio emitido por el Juez de Garantías Penales o el Tribunal de Garantías Penales, en la que se ha dispuesto una multa, esta es exigible pero:

...como es frecuente el condenado no se encuentra en condiciones de cancelar de una sola vez la suma total por lo que se le otorga una serie de facilidades para el pago (...) en el caso de que el condenado demuestre que su condición económica corresponde a extrema pobreza, el tribunal podrá establecer en la sentencia la condonación de una parte de la multa. (García, 2015, p. 664)

Notificado el Consejo de la Judicatura con la multa, dada en la sentencia condenatoria, la Dirección hace saber de ello al privado de la libertad sobre su cobro iniciándose el procedimiento de coactivas.

Como no existe dentro de nuestra legislación prisión por deudas, excepto en el caso de alimentos, cumplida la pena privativa de libertad y aunque no haya cancelado la multa se ordenará la excarcelación del que ha cumplido su pena; por ello diremos el cobro de las multas es ineficaz en la gran mayoría de los casos quedando en letra muerta esa



## Universidad de Cuenca

imposición penal. Y cómo no podría serlo si en la pobreza es en donde se fermenta la mayor parte de delitos.

### 2.4. La unificación de penas

¿Pero qué tiene que ver la acumulación de penas como institución jurídica del derecho penal con la unificación de condenas dadas en el derecho penitenciario?

La exposición y tratamiento analizados de las penas, de las clases de penas y de la concurrencia de infracciones, eran necesarias para dar contestación a este gran interrogante doctrinaria aquí planteada. Explicamos que la acumulación de penas o del concurso real se da cuando el mismo agente realiza, en ese mismo momento, uno o varios actos encaminados a fines distintos y que ocasionan diversas infracciones completamente independientes unas de otras, teniendo una independencia fáctica de los hechos que lo diferencia del concurso ideal; además que es necesario que no debe existir sentencia condenatoria intermedia entre los delitos, para poder distinguir el concurso material de la reincidencia.

Diverso es la situación y el caso cuando ya existen varias sentencias condenatorias ejecutoriadas por la que el sentenciado está cumpliendo diversas penas en el Centro de Privación de libertad; aquí corresponde calcular la pena total que debe cumplir el reo por todos esos delitos cometidos en diferentes tiempos y lugares, debiéndose establecer una pena única para todos ellos teniendo en cuenta un comportamiento persistente del condenado a infringir la ley penal.

Ahora bien, al expresar el Art. 35 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social que:

En caso de que se hayan impuesto diversas penas en virtud de sentencias de varios tribunales o juzgados, por iguales o distintas infracciones, se procederá... a señalar la pena única que devengará el reo.- Para el efecto, cuando ocurriere el caso previsto en el inciso anterior, el director del centro de rehabilitación social en que se encuentre el sentenciado cumpliendo la sentencia ...comunicará al





## Universidad de Cuenca

juez ... para que fije la pena única, aplicando las reglas del artículo 81 del Código Penal sobre concurrencia de infracciones.

Es decir, mira doctrinariamente que el sentenciado que haya cometido varios delitos y siendo reincidente, su pena única debe ser acumulada conforme al artículo 81 del Código Penal que habla de la concurrencia de infracciones, habiéndose en este sentido inclinado por la doctrina de la de aspersión o acumulación jurídica, diferente al de la acumulación aritmética; y, por la cual se impone la pena correspondiente al delito más grave de los que concurren aumentada en determinada forma que la ley determina.

Sistema de acumulación jurídica intermedia entre la acumulación material o aritmética y la acumulación por absorción, pues las dos son diametralmente contrapuestas, pues la primera es exagerada, ya que en la reunión de varias penas crece la intensidad de cada una de las mismas y la segunda impulsaría del culpable de un delito para cometer todos los demás que se le antojen, en la seguridad de no ser penado si no solamente por el más grave. Pensamos que esta posición debe ser adoptada claramente dentro del Código Orgánico Integral Penal que actualmente poseemos, como se lo venía aplicando en el Código Penal.

Acerca de este asunto piensa Zaffaroni que:

La doctrina nacional suele llamar unificación de penas a todo el supuesto en que debe condenarse por un delito después de una condena por la que el sujeto cumple pena. Es verdad que en todos estos casos (que son los contemplados en el Art. 58) se produce una unificación de penas construyéndose una pena total, pero en el caso de la unificación de penas tenga lugar por mediar un concurso real, cuya única particularidad, es que fueron distintos los procesos en que se juzgaron los hechos, la unificación de penas en consecuencia de una unificación de condenaciones: así como en el concurso real de los artículos 55, 56 y 57 hay una única condenación, también la debe haber en los casos en que hayan sido dos o más las sentencias condenatorias recaídas todas sobre delitos cometidos antes de la primera. La acumulación de penas es un sistema de la ley penal para



## Universidad de Cuenca

proceder a la punición en el supuesto de concurso real de delitos (Zaffaroni E. R., 2008, p. 1010).

La institución jurídica de la concurrencia de infracciones contemplada en el Art. 81 del Código Penal, para el caso de que el procesado sea juzgado por varios delitos autónomos e independientes en la que se le impondrá una pena única conforme a las reglas del mentado artículo del Código Penal es tomada, por el derecho penitenciario a través del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, por no tener un sistema propio.

También en el sentido anterior expresa García (2015) que la:

Refundición de condenas que no viene a representar sino la suma aritmética de todas las penas a que ha sido condenado el reo y que aún le restan por cumplir, no susceptibles de cumplimiento simultaneo, y la consideración de dicha suma como una pena única a efectos de la libertad condicional, y otras consecuencias penitenciarias, y todo ello de conformidad con el principio de ejecución única que preside el tratamiento penitenciario, pero sin que tal adición tenga repercusión alguna sobre la duración de las penas pendientes de cumplimiento.  
(p. 26)



## **CAPITULO III**

### **COMPARACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE PENAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, CÓDIGO PENAL Y SU INCIDENCIA EN LA REHABILITACIÓN SOCIAL**

#### **3.1. Procedimiento para la acumulación de penas**

En la acumulación de penas la competencia cumple el mandato Constitucional que consiste en que toda persona tiene derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, el Código Orgánico Integral Penal determina que es el Juez de Garantías Penitenciarias el competente para realizar la acumulación de penas que tiene que cumplir el sentenciado; y ya no el Juez de Garantías Penales o el Tribunal de Garantías Penales que tramitó y lo sentenció.

En el artículo 666 del Código Orgánico Integral Penal (2014) expresa que: “Competencia.- En las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias” Y a su vez el Art. 203 de la Carta Magna expresa que: “Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones”.

Cabe resaltar que la doctrina indica, la de un juez distinto para esta materia o sea el Juez de Garantías Penitenciarias, durante la ejecución de la condena es una garantía efectiva y soñada para quien es condenado y privado de la libertad; esto es una verdad real que aleja esos tiempos oscuros y desventurados en que quedaba el pobre sentenciado al arbitrio de los directores de los centros penitenciarios en cuanto a la ejecución de su condena, que causaban las más grandes injusticias e ignominias en los condenados sin que pudieran acudir o recurrir ante nadie en su desventura del quebrantamiento de sus derechos.



## Universidad de Cuenca

Por ello, algunos países introdujeron en su ordenamiento penal la figura del juez de ejecución de penas considerando que: “la aplicación de la pena no debe quedar exclusivamente a cargo de la órbita administrativa, siendo de utilidad la interacción de la justicia y de la administración penitenciaria en beneficio de la persona privada de la libertad”. (Levene, 1993, p. 344). Por ello el control de las garantías penitenciarias del recluso deja de ser administrativo y pasa a ser jurisdiccional.

Además, el Juez de Garantías Penitenciarias tiene la competencia jurisdiccional para efectuar el cómputo de las penas por los delitos cometidos por el reo, así lo determina el Art. 667 Código Orgánico Integral Penal: “La o el juez de garantías penitenciarias realizará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena”, el cómputo de la pena, así como la acumulación de penas pueden ser solicitadas por el centro penitenciario, por el recluso o de oficio el juez de garantías penitenciarias la puede realizar.

Ello es el inicio del control de los derechos y garantías penitenciarias de las personas que se encuentran privadas de la libertad habiéndose tenido en consideración que con las sentencias ejecutoriadas dadas por el Juez o Tribunal Penal, este se desentiende de la persona sentenciada y que con el proceso penal se agotó toda su intervención; pues no, ya que corresponde a los jueces de garantías penitenciarias observar el desenvolvimiento de la rehabilitación del sentenciado y también decidir en aspectos de trascendental importancia para el sentenciado como el de las rebajas de la pena, o los momentos en el que se podría someter a cambio de régimen en el camino de su progresividad hacia el cumplimiento integral de la pena.

Debemos tener presente que por los aspectos anteriormente analizados y en este mismo sentido, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece que: “Toda persona privada de la libertad, será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” y ese tratamiento deviene no sólo del reconocimiento de todos los derechos que le asisten como ser humano (cabe anotar que algunos derechos se encuentran restringidos), sino también en conocer el tiempo exacto de su condena, el momento en el que se podrá someter a cambio de régimen y



## Universidad de Cuenca

todas sus garantías en el camino de su progresividad, hacia el cumplimiento integral de la pena.

Ahora bien y ya en cuanto al cómputo de las penas que el juez de Garantías Penitenciarias debe realizar, conforme al Art. 667 del Código Orgánico Integral Penal que señala el camino al determinar que para efectuarse el cómputo de la pena al existir varias sentencias condenatorias privativas de la libertad, se acumularán las penas hasta un máximo de 40 años de pena privativa de libertad, debiendo contarse el inicio del mismo desde que estuvo el sentenciado privado de la libertad dentro del proceso penal y que en tal sentido para el cómputo de la pena se tomará en cuenta el tiempo que la persona sentenciada está efectivamente privada de su libertad. En otras palabras que dentro del cómputo de la pena determinada se debe incluir también la pena la prisión preventiva que el procesado sufrió durante el trámite de la causa penal.

Zaffaroni (2008) acerca de este asunto manifiesta:

Cuando un sujeto sea procesado simultáneamente por dos o más delitos, por el mismo o por diferentes tribunales, y resultase absuelto del o de los restantes, el tiempo de prisión sufrida por todos o por alguno de ellos, debe computarse en la pena impuesta, incluso cuando haya sufrido la prisión preventiva por un delito del que resultase absuelto (...). El derecho penal material dispone para el concurso real una única condenación, que debe materializarse en una única sentencia condenatoria”. (p. 942)

Durante la ejecución de la pena, si el privado de la libertad tiene varias condenas, por varios delitos autónomos e independientes, se procede a la acumulación de penas, con la finalidad de establecer el tiempo total de la pena que debe cumplir, para ello se tomará en consideración desde la fecha en la que perdió su libertad ambulatoria. Al respecto, tenemos el Art. 59 del Código Orgánico Integral Penal (2014) que establece:

“Las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta cuarenta años. La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa la aprehensión. En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo



## Universidad de Cuenca

medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad a favor de la persona sentenciada”.

También y relacionado con el cómputo de la pena, tenemos dentro de nuestra legislación penal, que ésta puede ser reformada cuando se compruebe que hubo un error al determinarlo o que existen nuevas circunstancias que ameriten para ello; como el cometimiento de un delito por el cual recibió una sentencia condenatoria; de ahí que el Art. 667 del Código Orgánico Integral Penal (2014) indica que: “El cómputo se reformará cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo ameriten”. Por lo tanto, es lo que se está aplicando en la actualidad por parte de los Jueces de Garantías Penitenciarias.

En este aspecto con acierto expresa García:

...un auto de acumulación ha de estar abierto siempre a la posibilidad de que aparezca después otra pena no acumulada, pero que tenía que haberlo sido de haber existido una tramitación normal. Si aparecieran nuevas condenas por delitos no contempladas en la anterior resolución sobre acumulación dictadas (...) habrá de dictarse un nuevo auto para hacer un cómputo que abarque la totalidad de las condenas; es decir, que una vez que se entra a revisar una acumulación anterior, la revisión no se limita a las penas efectivamente acumuladas, sino a todas las que fueron objeto de examen en el auto primero, incluidas las que no fueron objeto de acumulación. (García, 2015, p. 63)

Y el cómputo de la pena o la modificación del mismo, debe ser notificado tanto al “Centro de Privación de la libertad en el que se encuentra la persona privada de la libertad, al fiscal, a la persona sentenciada o a su defensor.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014), siendo esta la única notificación que durante la ejecución de la pena se remite a la Fiscalía, lo cual tiene la finalidad de que puedan objetar el cómputo de la pena, teniendo para ello un plazo de cinco días a partir de la notificación.

Durante el cumplimiento de la pena acumulada el privado de la libertad: Conoce la fecha exacta en la que accederá a los beneficios penitenciarios establecidos: en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, esto es a la fase de prelibertad



## Universidad de Cuenca

y la libertad controlada; y, en el Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento respectivo, esto es al Régimen Semiabierto y Abierto. Y también el tiempo exacto en el que el sentenciado finalizará la condena en su integridad; y esta fecha será en la que se gire la boleta de excarcelación.

En la ciudad de Cuenca, los jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales se encuentran con competencia en materia de garantías penitenciarias, para tramitar y resolver los casos de los privados de la libertad, basadas en las resoluciones Nros. 018-2014 y 032-2014 dictadas con el Consejo de la Judicatura.

Así, el cómputo de la pena en el transcurso del tiempo es un hecho natural que puede producir numerosos efectos jurídicos. Por ello, resulta fundamental determinar las reglas de medida del tiempo o computación temporal, dada su fundamental importancia que el mero transcurso del tiempo supone en la aplicación del Derecho Penal y en ella el de las penas privativas de la libertad. En consecuencia, cualquiera que fuera el momento en que empezaran a computarse las penas o los plazos prescriptivos, estos siempre tendrían una duración de treinta días por mes.

Y en este cómputo del tiempo en la acumulación de penas existe una diferencia notable entre el Código Orgánico Integral Penal (2014) y en el Código Penal de (1971). En el primero se toma en consideración que el año completo para la ejecución y cumplimiento de la pena será de 365 días, estando en concordancia con el Art. 33 del Código Civil que expresa:

Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en la leyes, o en los Decretos del Presidente de la República o de los Tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y corren además, hasta la media noche del último día del plazo.- El primero y el último día de un plazo de meses o de años deberán tener una misma fecha en los respectivos meses.- el plazo de un mes podrá ser, por consiguiente de veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días, y el plazo de un año de trescientos sesenta y seis días, según el caso...

En el segundo, o sea el Código Penal (1971), el artículo 59 determina que para el cómputo del tiempo de condena “la duración de un día es de veinticuatro horas. Y la de



## Universidad de Cuenca

un mes, de treinta días” y, por ende también para el caso de la acumulación de las penas, sería el de 360 días.

Y estas diferencias en la duración de las penas pueden ser apreciadas desde diferentes puntos de vista, pensamos que siempre debiera aplicarse el tiempo que más favorezca al reo y en este sentido que lo dispuesto en el Art. 59 del Código Penal es el más humano y adecuado en cuanto a los días del año y el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la duración de los meses, pues no debe olvidarse que todo ser humano que haya sido privado de la libertad debe albergar la esperanza de poder alcanzar su libertad y en ella luz de su porvenir.

### **3.2 Diferencias entre la acumulación de penas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal y el Código Penal.**

Siendo éstas como sabemos el de: Acumulación matemática, en la que se suma las penas de todos los delitos, sin límite alguno; el de la acumulación por absorción, cuando existen varios delitos con diferentes penas, en donde la pena del delito más grave absorbe a las otras penas; y la acumulación Jurídica, en la que todas las penas se acumulan, pero no sobrepasan los límites establecidos en la ley tenemos:

Que para el caso de concurrencia de infracciones, en el Art. 81 del Código Penal de 22 de enero de 1971, se dan: En su numeral 2, cuando manifiesta que “Cuando concurra un delito reprimido con reclusión con delitos reprimidos con prisión correccional o una o más contravenciones, se impondrá la pena señalada al delito más grave” el sistema de absorción.

En su numeral 1 y 3, cuando se expresa: “Si concurren varios delitos reprimidos con penas correccionales, o uno o más de estos delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las multas y penas de prisión correccional y de policía; pero de manera que la multa no pueda exceder del doble de la más rigurosa; y la prisión correccional, de seis años”; y. En su numeral 3 al señalar: “Cuando concurren varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se acumularán las penas por un máximo de treinta y cinco años”.





A su vez en el Código Orgánico Integral Penal (2014) se establece únicamente el sistema de acumulación jurídica cuando en su Art. 55, plasma que la: “Acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta años”; empero en el fondo al dejar de tener esta perspectiva de graduación por la gravedad de clase de delitos según se tratase de penas de prisión o reclusión como lo hacía el Código Penal, para ocultamente aplicar el sistema de acumulación matemática.

Por ello Ávila asevera:

“Lamentablemente, el COIP también tiene una parte punitivista, que va no solo en contra de la Constitución sino también en contra del capítulo de garantías y principios generales de aplicación del propio código (...) Con el nuevo COIP, las penas pueden ser hasta de cuarenta años (art. 20 y 55).” (Ávila, 2015, pág. 25).

El incremento de las penas privativas de la libertad, se ha dado con el pretexto de combatir la delincuencia, por ello la acumulación de penas son de hasta cuarenta años de pena privativa de libertad de acuerdo al Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal, siendo esta la más severa.

### SITUACIÓN PENITENCIARIA 2017

FECHA DE REPORTE	TOTAL PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	CAPACIDAD INSTALADA EFECTIVA (g)	% HACINAMIENTO* (i)=((f/g)-1)*100
31-ene-17	34 853	25 036	39.21 %
7-feb-17	35 288	25 086	40.67 %
15-mar-17	35 895	25 086	43.09 %
26-abr-17	36 050	25 086	43.71 %
31-may-17	35 909	25 420	41.26 %
28-jun-17	35 549	25 420	39.85 %
26-jul-17	35 809	25 420	40.87 %
30-ago-17	36 219	25 420	42.48 %
27-sep-17	36 353	25 420	43.01 %
25-oct-17	36 441	26 593	37.03 %
29-nov-17	36 656	26 593	37.84 %
27-dic-17	36 661	28 005	30,91%

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Registros administrativos de Centros de Privación de Libertad (2017).

Elaborado por: Dirección de Estadísticas y Análisis Económico del Sector.

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.  
Registro administrativos de Centros de Privación de la Libertad (2017).  
Elaborado por: Dirección de Estadísticas y Análisis Económico del Sector.

De acuerdo al gráfico se puede observar que a pesar de existir un incremento en las penas privativas de libertad hecho agravado con la acumulación de penas de hasta 40 años según lo que plasma el Código Orgánico Integral Penal, sin embargo la delincuencia en ningún momento ha disminuido, por el contrario esta se ha incrementado de conformidad con el cuadro en análisis, pues al 31 de enero del 2017, existen 34853 personas privadas de la libertad; para el 7 de febrero del mismo año la



## Universidad de Cuenca

cantidad se incrementa de 35288; mientras que para el 15 de marzo del 2017, el número de personas privadas de la libertad haciende a 35895; para abril 26 de 2017, tenemos 36050 personas; para el 31 de mayo del 2017 se da un leve descenso pues para esta fecha tenemos 35909; de igual forma para el 28 de junio tenemos el número de personas privadas de la libertad de 35549 personas privadas de la libertad; de igual manera para el 26 de junio del 2017 tenemos a 35809 personas privadas de la libertad, esta pequeña disminución no sigue su tendencia, por el contrario para el 30 de agosto del 2017, existen 36209 personas privadas de la libertad; para el 27 de septiembre del 2017 tenemos 36353 personas privadas de la libertad; para el 25 de octubre del 2017 tenemos a 36441 personas privadas de la libertad; mientras que para el 29 de noviembre del 2017 tenemos 36656 personas privadas de la libertad y para el 27 de diciembre del 2017 la cifra asciende a 36661; debiendo hacer hincapié a que la capacidad de estos centros de rehabilitación es inferior a la que en realidad existen, pues solo para citar el último dato la capacidad del centro es para 28005 reclusos y en la realidad existen 36661 personas privadas de la libertad con la que se demuestra que existe un hacinamiento en los centros penitenciarios, lo que impide que se de una eficaz rehabilitación de los reclusos, pues no tienen ni la infraestructura física adecuada que le permita desarrollarse como personas y con ello alcanzar una rehabilitación que le permitirá en el futuro ser otra vez parte de la sociedad.

La acumulación de penas que tienen como consecuencia largas condenas, por ello:

Los resultados de varios estudios apoyan el punto de vista de que el encarcelamiento prolongado, aunado a un bajo nivel de apoyo social, tiene una repercusión negativa sobre el bienestar físico y psicológico de los hombres y mujeres encarcelados” que Carlen (1985), observando que las internas con sentencias largas tienen más probabilidades, que las internas con sentencias cortas, de presentar una de las cuatro respuestas al dolor o sufrimiento que les produce la reclusión: muerte, auto mutilación y trastornos mentales. Así mismo, sus resultados indican que el establecimiento de vínculos sociales y afectivos con otras prisioneras



## Universidad de Cuenca

es uno de los primeros intentos de sobrevivencia y de adaptación de las mujeres delincuentes con sentencias largas sin esperanzas. (Galván, 2006, p. 70)

Corresponde observarse así mismo que dentro de nuestra legislación penal y penitenciaria, a medida de que el límite de la acumulación de penas se incrementó en el Código Orgánico Integral Penal paralelamente también se incrementó el tiempo para que los reclusos, que cumplen con sus penas, puedan acogerse a los beneficios penitenciarios.

En el Código Orgánico Integral Penal, corresponde anotar, establece en su Art. 696 que las personas privadas de la libertad sentenciadas y que se encuentran cumpliendo sus penas deben pasar por los siguientes regímenes de rehabilitación social: 1) Cerrado; 2) Semiabierto; y, 3) Abierto.”. Pudiendo únicamente acogerse a los beneficios penitenciarios de los regímenes semiabierto y abierto. Y que para obtener los dos últimos, en su orden, se dispone en el Código Orgánico Integral Penal: en el Art. 698 que: “Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el sesenta por ciento de la pena impuesta”; y en el Art. 699, para el régimen abierto, que “para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el ochenta por ciento de la pena”. Como se ve en el Código Orgánico Integral Penal para acogerse a los sistemas de beneficios penitenciarios del Régimen Semiabierto se debe cumplir con el 60% de privación de la libertad; y, para el Régimen Abierto se debe cumplir el 80% de la pena privativa de libertad.

Como se ve en el Código Orgánico Integral Penal para acogerse a los beneficios penitenciarios el tiempo es mayor que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social determinaba que: Para el beneficio penitenciario de la prelibertad se debe cumplir el 40% de la pena privativa de libertad y para el beneficio penitenciario de la Libertad Controlada se debe cumplir el 60% de la pena privativa de libertad.

De esto se ve, una vez más que el sistema de la rehabilitación social ha sufrido un retroceso en cuanto a los derechos de las personas sentenciadas, puesto que, el



## Universidad de Cuenca

incremento en las penas perjudica a su vez también a la prosecución de los beneficios penitenciarios.

En la actualidad, del beneficio más benigno determinado, en este asunto, en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, gozan únicamente los que se encuentren dentro de la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal (2014) que expresa:

Los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio hasta su conclusión.

Por lo tanto, en base a esta disposición transitoria que se aplica del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social es más favorable para los reclusos y se encuentra de acuerdo con la Constitución de la República en su Art. 201, expresa: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos”.

Haciendo efectivo de esta manera, el respeto a los derechos humanos de los privados de la libertad también garantizados en Pactos y Convenios Internacionales que rige nuestro ordenamiento jurídico, como aquellos ya mencionados: Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que en el apartado 3 del Art. 11 manifiesta: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”, y, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Art. 10 párrafo 3, al establecer que “la finalidad esencial de las autoridades de las cárceles en su trato a los reclusos será alentar la reforma y la readaptación social de los penados”.

Pero para aquellos sentenciados desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal dicha disposición transitoria, ya no se aplica, debido a que el tiempo del cometimiento del delito fue posterior al año 2014, por ello se debe aplicar la normativa vigente en la actualidad, que es el Código Orgánico Integral Penal.

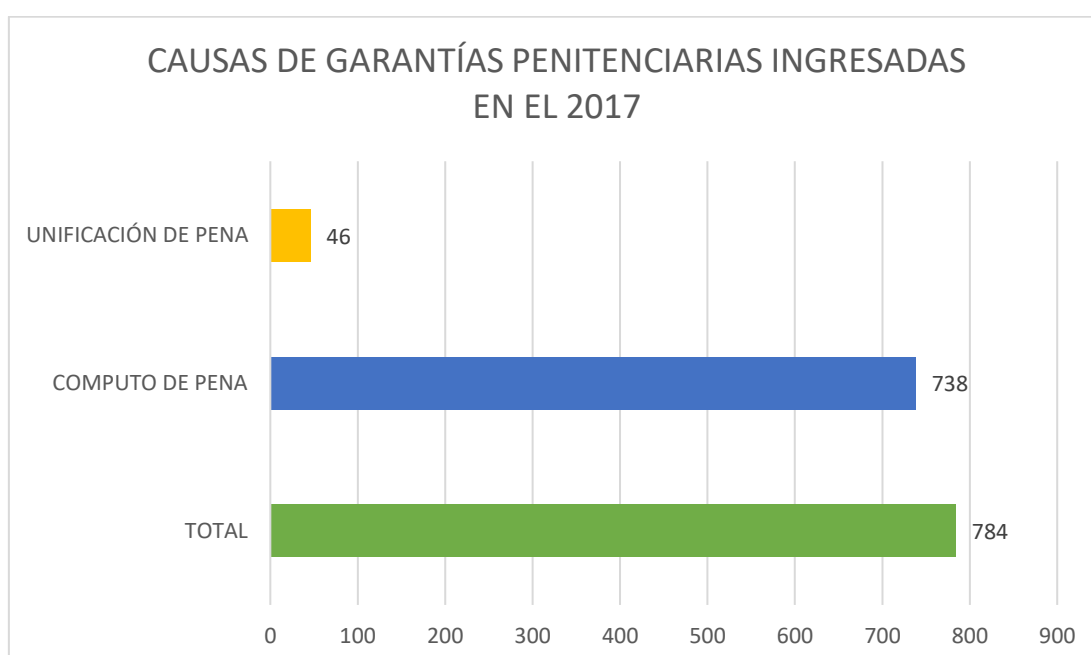


Otra diferencia referente a la acumulación de penas entre el Código Orgánico Integral Penal (2014) y Código Penal está en el límite del tiempo para computarse, pues en el primero, el límite es “hasta un máximo de 40 años”, mientras que en el segundo, el límite máximo para realizar la acumulación de penas es “de 35 años”, siendo esta última la más favorable al sentenciado, que aquella establecida en el nuevo cuerpo legal que es inhumana y más severa.

### 3.3 Diferentes situaciones dadas dentro de la acumulación de penas privativas de libertad conforme a la aplicación del Código Orgánico Integral Penal y el Código Penal.

Para determinar las diferentes situaciones dadas dentro de la acumulación de penas conforme a la aplicación del Código Orgánico Integral Penal y el Código Penal en la actualidad, y cuál de estas normas se apega a rehabilitación social que propugna nuestra Constitución en su artículo 201, es necesario tener como referencia las causas tramitadas en la realidad en los juzgados de garantías penitenciarias, durante el año 2017.

#### Causas de garantías penitenciarias ingresadas en el 2017





## Universidad de Cuenca

Figura 1. Causas de garantías penitenciarias ingresadas en el 2017

Fuente: Coordinación del Consejo de la Judicatura Del Azuay

Elaborado por: Coordinación del Consejo de la Judicatura Del Azuay, 2017

De acuerdo al gráfico, en materia de Garantías Penitenciarias durante el año 2017, han ingresado a los dieciséis Juzgados de la Unidad Judicial Penal de Cuenca con competencia en materia de Garantías Penitenciarias, 784 casos; y de ellos 738 por computo de penas y 46 por unificación de penas, conforme a la información del Consejo de la Judicatura del Azuay.

Para una mejor comprensión, fundamental es saber la forma de acumulación de penas utilizadas en el Código Penal y la utilizada por el Código Orgánico Integral Penal. Así, pues: es necesario recordar, que doctrinariamente existen tres sistemas de acumulación de penas:

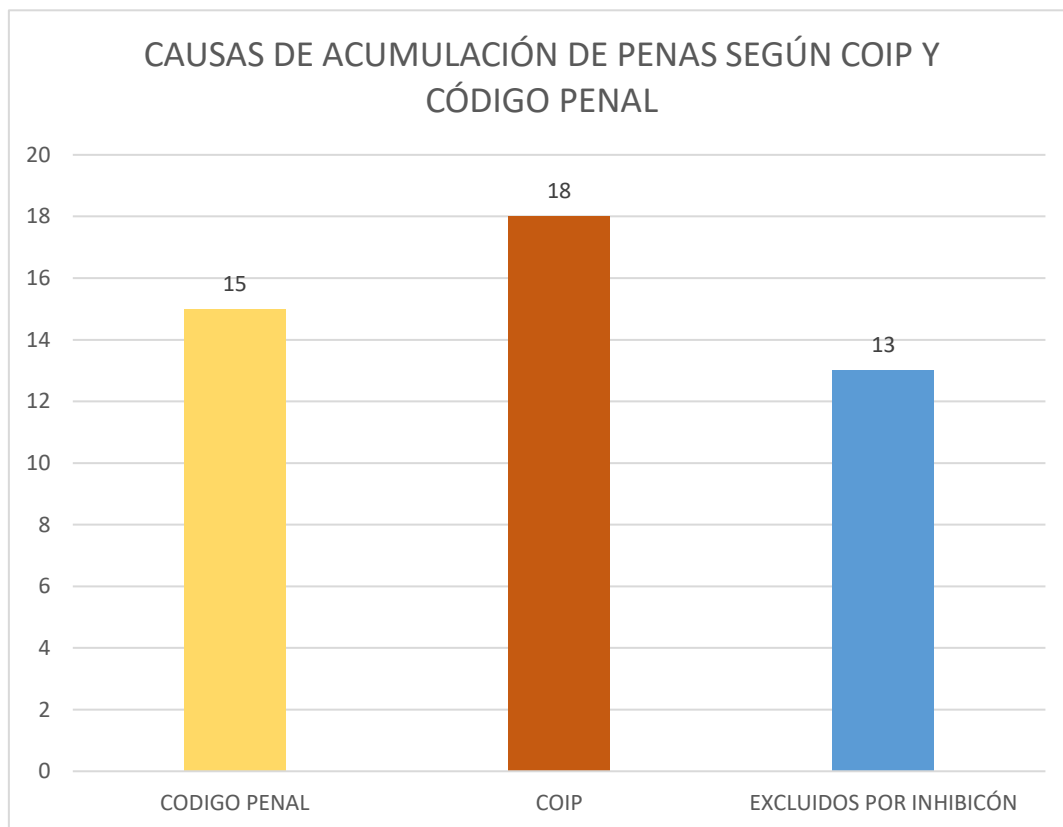
Primer Sistema, la acumulación material de las penas, conforme el cual las penas de los distintos delitos se suman indefinidamente sin límite alguno. Sistema de absorción, conforme al cual la pena del delito mayor absorbe a todas las demás. Sistema que no se aplica en el Código Orgánico Integral Penal; y Sistema de acumulación jurídica por la cual se acumulan las penas sin que sobrepase el límite máximo establecido en la propia ley.

Ya en la práctica, en el Art. 81 del Código Penal, se establece la acumulación de penas según la gravedad de los delitos, dependiendo si son sancionados con pena de prisión o de reclusión; dándose tres maneras de acumulación de las penas privativas de libertad, en donde observamos que se aplican dos (el de absorción y jurídica) de los tres sistemas a los que se refiere la doctrina, (reservándose una tercera –material- solo para la acumulación de penas pecuniarias); Así tenemos:

Primero, si concurren delitos sancionados prisión, las penas se acumulan hasta un máximo de seis años. Se aplica el sistema jurídico. Segundo cuando concurren varios delitos sancionados con reclusión o con prisión y reclusión, las penas son absorbidas por la pena del delito más grave. Se utiliza el sistema por absorción. Tercero, cuando concurren varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se acumularán las penas por un máximo de treinta y cinco años. Se utiliza el sistema jurídico. Con la

aplicación de estas reglas se puede entender los casos que existen en la Función Judicial de Cuenca.

Estableciéndose en consecuencia a su vez en dicho artículo 81 del Código Penal, 3 límites en cada caso: en el primero de 6 años, en el segundo la pena mayor; y el tercero de 35 años. En cambio, en la acumulación de penas del Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal se dan una sola forma de acumulación de pena, que se consigue sumado todas ellas con el único límite de 40 años, por lo tanto, se da la acumulación jurídica.



#### CAUSAS INGRESADAS POR UNIFICACIÓN DE PENAS

Figura 2. Causas ingresadas por unificación de penas.





## Universidad de Cuenca

Fuente: “SATJE” Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano.

Elaborado por: Barahona L., 2017

De acuerdo al gráfico, luego de haber revisado en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, conocido con las siglas “SATJE”, las causas ingresadas por acumulación de penas durante el año 2017, encontramos como resultado que: 15 causas se han tramitado con el Código Penal en base a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal; mientras que las 18 causas se tramitan con el Código Orgánico Integral Penal; se deja de lado los 13 casos que fueron excluidos por inhibición, es decir que han sido remitidos a otros juzgados que ya habían prevenido en el conocimiento en materia de garantías penitenciarias. De aquello tenemos que para el año 2017, de las muestras obtenidas, a 13 causas se continúa aplicando el Código Penal para la acumulación de penas aunque ya está derogado, pero que es posible su aplicación en base a la disposición transitoria tercera del Código Orgánico Integral Penal, mientras que a las otras 18 causas se aplica el vigente Código Orgánico Integral Penal.

De esto, se comienza ya a visualizar que la forma de acumulación de penas establecidas en el Código Penal ya derogado es más beneficiosa a los privados de la libertad, tal es así que se continúa utilizando en gran medida en base al principio de favorabilidad, justamente porque le es más favorable que la fórmula introducida para la acumulación de penas en el vigente Código Orgánico Integral Penal.

Justamente porque estas formas de acumulación están de acuerdo a lo que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 201 dispone, al igual que los Instrumentos Internacionales ya analizados, es decir que, los privados de la libertad se reinserten a la sociedad, porque al acumular las penas obtienen una pena acumulada más corta en el tiempo, que la acumulada con el Código Orgánico Integral Penal que será siempre más larga en cuanto al tiempo de duración, da la oportunidad al sentenciado a la reinserción a la sociedad como un ente de la misma en un tiempo más próximo, que en aquel caso que al acumularse a una pena larga que imposibilita reinsertarse a la

sociedad por cuanto es poca la expectativa de vida que le queda, allá fuera en la sociedad, por cuanto la mayor parte de su vida estará aislado de la misma, por tanto alejándose de aquel principio constitucional de reinserción social, restringiéndose aquellas disposiciones de la propia Constitución del 2008, en la que las personas privadas de la libertad son consideradas como un grupo de atención prioritaria según su Art. 35, tanto en el ámbito público como privado, la cual se ve afectada por esta nueva forma de acumular las penas exageradamente en el Código Orgánico Integral Penal.

### Porcentaje de acumulación de penas en el Código Orgánico Integral Penal y Código Penal

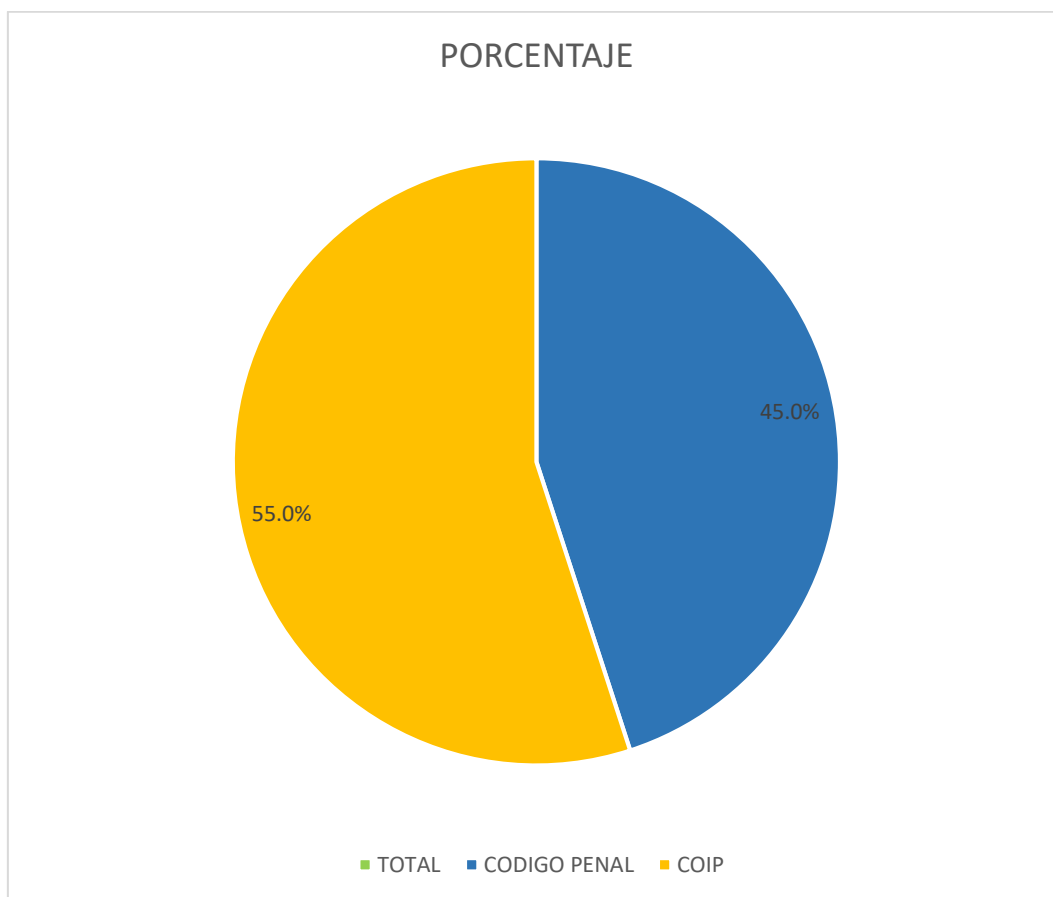


Figura 3: Porcentaje de acumulación de penas en el Código Orgánico Integral Penal y Código Penal.

Fuente: “SATJE” Sistema Automático de Trámite Judicial



## Universidad de Cuenca

Ecuatoriano.

Período: año 2017

Elaborado por: Barahona L. 2017.

De acuerdo al gráfico, hablando en porcentajes para tener una idea más clara, tenemos que de las causas ingresadas por unificación de penas en el cuarenta y cinco por ciento se han aplicado las reglas sancionadas del Art. 81 del Código Penal, habiéndose ellos beneficiado de este Sistema de Rehabilitación Social acorde a lo propugnado por nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Art. 201; mientras que los otros han tenido que sufrir el retroceso de sus derechos en esta área. Por cuanto ha desaparecido las reglas del artículo 81 del Código Penal que les permitían, según la gravedad de los delitos, obtener una pena más corta.

Los casos a analizar son los extraídos de la página web de consulta de causas del Consejo de la Judicatura en base a la información dada del año 2017, pero en los que se omitirán los nombres de las personas sentenciadas, debido a la protección de su identidad conforme el Art. 66. 19 la Constitución de la República en relación con lo que lo dispone el Art. 12 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal que plasma: “Protección de datos de carácter personal.- La persona privada de libertad tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, que incluye el acceso y uso de esta información”.

En primera instancia veremos los casos de acumulación de penas de acuerdo a las reglas del Art. 81 del Código Penal:

Caso 1. Proceso No.: 01283-2017-08793, presenta:

“Se constata la presencia de los sujetos procesales. Se instala la audiencia. Interviene Dr.XX, asumiendo la defensa de NN, y expresa: Solicito se aplique la unificación de las penas de las dos sentencias de los juicios signados, el primero con el N°. 07121-2014-0084 y el segundo con el No. 07121-2014-0084, que se encuentran agregadas en el proceso penitenciario; ambas sentencias por prevaricato, ejecutoriadas y emitidas



por el antiguo Código Penal derogado; y, pido habiendo cumplido con los requisitos para que en resolución conceda este beneficio penitenciario, la unificación de las dos penas; ello amparado: en los Arts. 169 y 172 de la Constitución, en la del COFJ su Art. 230, en el Art. 81 del Código Penal de la concurrencia de infracciones; del Art. 34 del Código de Ejecución de Penas. Resolución del Juez: (Resumen en 200 caracteres): En esta audiencia se ha escuchado al abogado de la defensa el mismo que pide la acumulación de las penas referidas y siento este Juez competente y de autos se constata que el señor NN, tiene dos sentencias ejecutoriadas, en ambas sentenciado a una pena de 5 años por el delito de prevaricato; que conforme dispone el Código de Ejecución de Penas, se tiene que aplicar lo dispuesto en el Art. 81 del Código Penal y en consecuencia el peticionario tiene que cumplir 6 años de prisión que es el límite determinado en la ley”. (2017)

En este caso se aplica la primera forma de acumulación, del Art. 81 del Código Penal, según la cual si concurren delitos sancionados con prisión, las penas se acumulan hasta un máximo de seis años; es decir, se aplica el sistema doctrinario de la acumulación jurídica en la que se suman las penas con el límite establecido en la Ley de 6 años, veamos:

En este caso, el privado de la libertad tiene dos sentencias condenatorias con penas de cinco años de prisión cada una, penas ejecutoriadas a la vigencia del Código Penal y del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, habiéndose aplicado en él, el principio de favorabilidad, pues es la ley del Código Penal la que más le favorece al reo, a pesar que al momento de realizar la acumulación es el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra en vigencia. Habiéndose aplicado el Art. 35 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que en cuanto a la acumulación de penas, nos remite se haga conforme el Art. 81 del Código Penal, normas legales que se si está basada en la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal.



## Universidad de Cuenca

Acumulación en la que se ha aplicado el sistema de acumulación Jurídica de penas, contemplado en la regla 1 del Art. 81 del Código Penal, pues se suman las dos penas de 5 años de prisión cada una, pero no puede sobrepasar el límite establecido por la ley que es de seis años. Siendo los 6 años en definitiva la pena que tendrá que cumplir.

Así también, el sentenciado tiene derecho a los beneficios penitenciarios establecidos en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su respectivo Reglamento vigentes hasta antes del Código Orgánico Integral Penal, cuanto más que este último cuerpo de leyes, materializando el principio de favorabilidad, en su disposición transitoria tercera, establece que: “los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas que estén tramitándose cuando entre en vigencia el Código Orgánico Integral Penal seguirán sustanciándose conforme al Código de Ejecución de penas”.

Así, una vez acumulada la pena, la persona que se encuentra cumpliendo ésta, tiene derecho a acogerse al beneficio de la prelibertad al cumplirse el 40% de la pena impuesta y de acogerse al beneficio de libertad controlada cuando cumpla con el 60% de la pena. Es decir tiene derecho a acogerse al beneficio de prelibertad a los 2 años 5 meses; y al del beneficio penitenciario de libertad controlada a los 3 años 7 meses.

Lo expuesto en las anteriores líneas no ocurriría si se aplicaría la acumulación de penas conforme lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, pues de acuerdo a su Art. 55 las penas tendrían que sumarse, y en lugar de cumplir con los seis años, habría tenido que cumplir 10 años. Y para acogerse al beneficio penitenciario del Régimen Semiabierto, tendría que cumplir el 60% de la pena impuesta y para que se le aplique el régimen abierto tendría que cumplir el 80% de la pena; es decir para acogerse al primero o sea al régimen Semiabierto habría tenido que cumplir 6 años de pena privativa de libertad y para acogerse al régimen abierto habría tenido que cumplir 8 años.

Caso 2.- Expediente No. 01283-2017-01765 expone:

“El sentenciado (...), perdió la libertad el 10 de mayo del 2017, por el delito de asesinato... Y comparece solicitando que conforme al Art. 35 del Código de



## Universidad de Cuenca

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y 81 del Código Penal se le aplique la pena única, con respecto a las sentencias ejecutoriadas emitidas en su contra. Para resolver se considera: PRIMERO.- Que las referidas sentencias, que constan en el expediente, son la de los: 1.-Juicio 0127-2012, sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago, en Macas el 7 de mayo del 2013 a las 08h54, por el delito de asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 450 números 1 y 7 del Código Penal, en la que se le impone una pena de dieciséis años de reclusión mayor especial. 2.- Del proceso 2013-0054, sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago, en General Proaño, el 14 de junio del 2013 a las 14h57, por el delito de abuso de armas, previsto en el Art. 488 del Código Penal y en la que se le impone dos años de prisión correccional. 3.- El proceso 0114-2012, sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago, en Macas, el 15 de noviembre del 2012, a las 09h14, por el delito de abigeato, previsto en el Art. 554 y sancionado en el Art. 555 del Código Penal y en la que se impone un año de prisión correccional. 4.- La causa 0012-2014, sentencia emitida por la Sala única de la Corte Provincial de Justicia de Puyo, en Pastaza el quince de abril del 2014, a las 15h24, que confirma la sentencia de 17 de marzo del 2014 resuelta por el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza por el delito de robo, previsto y sancionado en los artículos 550 Y 551 del Código Penal, habiéndosele impuesto la pena de un año de prisión correccional. SEGUNDO.- Las penas impuestas son de reclusión mayor especial y de prisión correccional: de acuerdo a la clasificación constante el Código Penal antes vigente e inexistente en el Código Orgánico Integral Penal; y en acatamiento de la Tercera Disposición Transitoria del Código Orgánico Integral Penal corresponde aplicar lo dispuesto en el Art. 35 del Código de Ejecución de Penas que dispone que en caso de penas derivadas de varias sentencias de tribunales o juzgados, el Juez deberá señalar la pena única que devengará el reo; este artículo debe aplicarse en relación con el artículo 81 del Código Penal, regla constante en el número 2, que dispone que ante la concurrencia de una pena de reclusión penas de prisión, se impondrá la



## Universidad de Cuenca

pena señalada al delito más grave. TERCERO.- En tal virtud, se resuelve: fijar como pena única dieciséis años que deberá cumplir (...). Que de acuerdo con lo regulado en el artículo 56 del Código de Ejecución de Penas y 59 del Código Penal, la pena única se cumple el veintiuno de febrero del 2028, fecha en la cual y por secretaría se libraré la boleta de excarcelación. Remítase copia de este auto al Director del Centro Carcelario ya mencionado. Téngase en cuenta la casilla judicial y correo electrónico para notificaciones al privado de la libertad y la autorización de patrocinio.” (2017)

En este caso se aplicará la segunda forma de acumulación de penas, del Art. 81 del Código Penal, según la cual cuando concurren varios delitos sancionados con prisión y reclusión, las penas son absorbidas por la pena del delito más grave; es decir, se aplica el sistema doctrinario de la acumulación por absorción en la que la pena del delito mayor absorbe a las demás, veamos:

En el caso mencionado dentro del Expediente No. 01283-2017-01765 la acumulación de penas es efectuada por la Unidad Judicial Penal de Cuenca, causa en la cual vemos que el privado de la libertad tiene 4 sentencias condenatorias con penas diferentes: 1) Una de dieciséis años de reclusión mayor especial, por el delito de asesinato, tipificado y sancionado en el Art. 450 números 1 y 7 del Código Penal. 2) Otra de dos años de prisión correccional, por el delito de abuso de armas, previsto en el Art. 488 del Código Penal. 3) También a la de un año por abigeato, previsto en el Art. 554 y sancionado en el Art. 555 del Código Penal; y, 4) La de un año de prisión correccional, por delito de robo, previsto y sancionado en los Arts. 550 y 551 del Código Penal.

En este caso el privado de libertad tiene varias sentencias ejecutoriadas a la vigencia del Código Penal y del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, habiéndose aplicado en él, el principio de favorabilidad, pues es la ley del Código Penal la que más le favorece al reo, a pesar que al momento de realizar la acumulación es el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra en vigencia, pero de acuerdo a la disposición transitoria tercera *Ibídem*, se aplica el Art. 35 del Código de Ejecución de Penas y



## Universidad de Cuenca

Rehabilitación Social, que en cuanto a la acumulación de penas, nos remite se haga conforme el Art. 81 del Código Penal.

En este caso es aplicado el sistema de acumulación de penas por absorción, contemplado en la regla 2 del Art. 81 del Código Penal, pues la pena que se aplica es la pena más grave de dieciséis años y que absorbe a las demás penas y el límite en este caso se encuentra implícita dentro de la misma pena más grave.

Y este sentenciado que se halla cumpliendo la pena acumulada tiene derecho de acogerse al beneficio de la prelibertad al cumplir el 40% de la pena impuesta y de acogerse al beneficio de libertad controlada al cumplir el 60% de la pena; es decir tiene derecho a acogerse al beneficio de prelibertad a los 6 años 4 meses de estar privado de la libertad; y de acogerse al beneficio penitenciario de libertad controlada a los 9 años 6 meses de estar privado de la libertad.

Ello no ocurriría si se aplicara la acumulación de penas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, pues según su Art. 55 las penas tendrían que sumarse, y en lugar de cumplir con los 16 años, hubiera tenido que cumplir 20 de años, sumándose todas las penas (16 años por el delito de asesinato, dos años por el delito de abuso de armas, un año por abigeato y la de un año por robo). Y para acogerse al beneficio penitenciario del Régimen Semiabierto, tendría que cumplir el 60% de la pena impuesta y para el régimen abierto tendría que cumplir el 80% de la pena; es decir para el régimen Semiabierto habría tenido que cumplir 12 años de estar privado de la libertad y para el régimen abierto habría tenido que cumplir 16 años de estar privado de la libertad.

Luego de haber analizado los casos amparados en el Código Penal, ahora veremos los casos de acumulación de penas tramitados con el Código Orgánico Integral Penal:

Caso 1 Expediente No: 01283-2017-01123





## Universidad de Cuenca

“Expediente No. 01123G-2017 Cuenca, 01 de JUNIO de 2017.- Las 16h52.-

VISTOS: Incorpórese a los autos el oficio No. 0-430-MJDHC-CRSRSCST-C-DL 2017, suscrito por el doctor Paúl Tobar Quezada Director del Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Sur Turi, en cuenta su contenido para los fines legales pertinentes. En lo principal, de conformidad a lo establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador que consagra la seguridad jurídica y en aplicación del artículo 667 del Código Orgánico Integral Penal que establece el Cómputo de la Pena se la realiza en los siguientes términos: El privado de la libertad (...) dentro de la causa signada con el No.17282-2015-02361 la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencias en infracciones flagrantes, sede en el Cantón Quito, por el delito de robo, impuso la pena de dos años de pena privativa de libertad; dentro de la causa signada con el No.17282-2015-01362 la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencias en infracciones flagrantes, sede en el Cantón Quito, por tentativa de robo impuso la pena de seis meses de pena privativa de libertad, conforme se desprende de las sentencias que en copias certificadas constan de autos en la cual con la razón de ejecutoria y por lo tanto pasada en Autoridad de cosa juzgada e inamovible. En atención a lo dispuesto en el Art. 55 en relación con el Art. 59 del COIP, se acumulan las penas que deberá devengar la persona adulta en conflicto con la ley, esto es dos años seis meses de pena privativa de libertad. El privado de la libertad ha sido detenido en fecha 28 de mayo de 2015, ha ingresado al Centro de Rehabilitación Social el mismo día; y se computa que la privada de la libertad tiene que cumplir la pena privativa de libertad de dos años seis meses, se determina que cumple la pena integral 13 de noviembre del 2017. Notifíquese con esta resolución al Director del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur-Turi, al fiscal de la causa, a la sentenciada y a su defensor para los fines que importen en derecho conforme lo determina el artículo 667 inciso tercero del COIP.- Cúmplase”.



## Universidad de Cuenca

Análisis del caso: En cuanto a la acumulación de penas privativas de libertad.- En este caso se realiza la acumulación de penas privativas de libertad, debido a que la persona sentenciada tiene dos sentencias condenatorias y ejecutoriadas con el Código Orgánico Integral Penal, delitos cometidos independientes: por robo sentenciado a dos años y por tentativa de robo sentencia a seis meses, por lo tanto la acumulación de penas se realiza conforme lo establece Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal, en este caso se aplica el sistema de acumulación jurídica de las penas, por cuanto se ha fijado como pena única la de “dos años seis meses” de pena privativa de libertad, en la que se suman las penas con la única limitación del máximo establecido por la ley, que en el Código Orgánico Integral Penal hasta el máximo de 40 años.

La normativa que se aplicable es el Código Orgánico Integral Penal (2014) que en su el Art. 55 establece: “Acumulación de penas.- La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta años”. Norma bajo el cual fue sentenciado el penado.

En cuanto a los beneficios penitenciarios aplicables en el caso analizado es el régimen Semiabierto al cumplir el 60% de la pena y el régimen abierto al cumplir el 80% de la pena, conforme lo establecen los Arts. 698 y 699 del Código Orgánico Integral Penal.

La acumulación de penas en este caso, no parece afectar, la rehabilitación social conforme lo establecido en el Art. 201 de la Constitución de la República, dado que las penas que se le impuso son cortas en cuanto a la duración en el tiempo. Parece estar de acuerdo con la progresión del privado de libertad al permitir al sentenciado acceder a los beneficios penitenciarios del régimen Semiabierto y abierto.

Por cuanto la regla del Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal aplicada en este caso concreto, se realiza el sistema de acumulación jurídica, parecería no diferenciarse con la regla primera del Art. 81 del Código Penal, pues aplica de igual manera el sistema de acumulación jurídica, pues en uno y otro caso las penas se suman, la diferencia



## Universidad de Cuenca

consustancial es que el límite de la acumulación de penas que establece el Código Orgánico Integral Penal es de hasta 40 años, mientras que el límite máximo que establece el Código Penal es hasta 6 años.

Sin embargo, se ve ya un retroceso en cuanto a los tiempos requeridos para acogerse a los beneficios penitenciarios, es así que en este caso para acogerse al Régimen Semiabierto requiere haber cumplido el 60% de la pena privativa de libertad y para acogerse al Régimen abierto requiere cumplir con el 80%, a diferencia de los casos cuya penas se acumularon con la legislación anterior a la del Código Orgánico Integral Penal, pues el tiempo para acceder a la prelibertad era menor ya que requería cumplir el 40% de la pena y para acogerse a la libertad controlada requería cumplir el 60% de la pena. Desde ya siendo un retroceso al principio de rehabilitación que propende nuestra Constitución en su Art. 201.

Pero, la afectación fundamental con la aplicación del sistema de acumulación de penas establecidas en el Art. 55 del COIP lo vamos a ver para la acumulación de penas de mayor duración, como en el siguiente caso:

Caso 2. Expediente No. 01283-2018-07425G.

“VISTOS: Agréguese al proceso el Oficio No. 02744-MJDHC-CPLRSCST-DP-RMAZ-2018, (...), suscrito por la Dra. Daniela Urigüen García, Directora del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur-Turi, así como la documentación que se adjunta, tómese en cuenta lo manifestado y su contenido para los fines de ley.- Teniendo en cuenta la información constante en las piezas procesales dentro de la presente causa, así como, de la información que se ha recabado, este Juez, conforme lo dispone el Artículo 55, del Código Orgánico Integral Penal, procede a realizar el cómputo de las penas que se han impuesto al ciudadano que responde a los nombres de: NN, este Juez, hace las siguientes consideraciones: UNO.- En base a la información referida, se tiene conocimiento que el ciudadano (...), al momento ha recibido dos sentencias condenatorias dictadas en su contra,: a) Dentro del proceso penal No. 01283-2017-02337G, del



## Universidad de Cuenca

Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, en el que se le ha impuesto una pena privativa de libertad de “veinte y dos años”; b) Dentro del proceso penal No. 01283-2017-02312G, del Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, en el que se le ha impuesto las penas privativas de la libertad de: “veinte y nueve años cuatro meses”.- DOS.- Conforme lo dispone el Numeral 4, del Art. 3, de la resolución No. 176-2014, emitida por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, así como, del Art. 230, del Código Orgánico de la Función Judicial; Arts. 666 y siguientes, del Código Orgánico Integral Penal; y, numeral 3, del Art. 203, de la Constitución de la República, este Juez, es competente para conocer, tramitar y resolver asuntos relacionados a garantías penitenciarias; TRES.- No se han omitido solemnidades sustanciales que pudieran afectar la validez procesal, por lo que se declara válido lo actuado, al haberse cumplido las garantías del debido proceso, consagrados en los Artículo 1, 11, 75, 76, 77, 82, 168.6, 169, y 203, de la Constitución de la República. CUATRO.- La persona sentenciada: NN, ha sido privado de la libertad el “03 de mayo del año 2017”.- CINCO.- La sumatoria de las penas privativas de libertad, impuestas en las dos sentencias condenatorias antes referidas, dan un total de: “cincuenta y un años y cuatro meses”, sin embargo el Art. 55, del Código Orgánico Integral Penal, claramente dispone que: “La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta años”.- Por lo manifestado, esta Autoridad: RESUELVE: En lo que respecta a la acumulación de penas, (...), deberá cumplir, una pena privativa de libertad, acumulada, de hasta “CUARENTA AÑOS”. Así mismo, en lo que se refiere al cómputo de la pena, a ser cumplida por el sentenciado: (...), se ha de computar la los cuarenta años, de pena privativa de la libertad acumulada, a partir del día en que fuera privado de su libertad, pudiendo hacer uso del régimen progresivo de rehabilitación social, en el siguiente orden, según Reporte de Fases Progresivas y de Rebajas: a) Régimen Semiabierto, en fecha 28 de Diciembre del año 2040, al cumplir el 60 %, de la pena impuesta; b) Régimen Abierto, en fecha 16 de Noviembre del año 2048, al cumplir el 80 %, de la pena impuesta; c) Libertad con Rebajas, en fecha 26 de Octubre del año



## Universidad de Cuenca

2052, al cumplir el 90 %, de la pena impuesta; y, d) Libertad sin Rebajas, en fecha 05 de Octubre del año 2056, al cumplir el 100 %, de la pena impuesta.- Se indica que: (...), al momento lleva privado de la libertad “quinientos cincuenta días (559 d.), lo cual representa el “cuatro por ciento (4 %), de la pena impuesta.- Así mismo, esta resolución no se entenderá firme, pues, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Inciso Cuarto, Artículo 667, del Código Orgánico Integral Penal.- Oficiése a la Sra. Directora del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur-Turi, de esta Ciudad de Cuenca, dando a conocer la presente resolución para los fines de ley.- Cúmplase y Notifíquese”.-

En este caso la acumulación de penas se la realiza a la vigencia del Código Orgánico Integral Penal y aplicando sus reglas, puesto que los delitos ya no fueron tipificados y sancionados con el Código Penal. En esta causa ya no se ha aplicado: El principio de favorabilidad, pues aquí no hay la ley que más le favorece al reo como el Código Penal, pues la ley aplicada al caso es la vigente al momento de realizar la acumulación de penas es la del Código Orgánico Integral Penal, por ello no se aplica el Art. 35 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, el que a su vez, para efecto de acumulación de penas, nos remitía al Art. 81 del Código Penal.

Por el contrario, es aplicado el sistema jurídico de acumulación de penas, contemplado en el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal, pues la pena que se aplica es la suma de todas las penas con el único límite de 40 años.

Y en este caso en particular el sentenciado que se halla cumpliendo la pena acumulada de 40 años, tiene derecho de acogerse al beneficio del Régimen semiabierto al cumplir el 60% de la pena impuesta y de acogerse al Régimen abierto al cumplir el 80% de la pena; es decir tiene derecho a acogerse al Régimen semiabierto a los 24 años de estar privado de la libertad; y de acogerse al régimen abierto a los 32 años de estar privado de la libertad.

Mientras que si se hubiese aplicado el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, se hubiese acogido a los siguientes beneficios penitenciarios: prelibertad y



## Universidad de Cuenca

libertad controlada, y para acogerse al beneficio penitenciario de Prelibertad, tendría que cumplir el 40% de la pena impuesta y para el régimen de libertad controlada tendría que cumplir el 60% de la pena; es decir para la fase de Prelibertad tendría que cumplir 12 años de estar privado de la libertad y para la fase de libertad controlada tendría que cumplir 16 años de estar privado de la libertad. Además en cuanto a la acumulación de penas, si se aplicara la acumulación de penas establecidas en el Código Penal, pues según su Art. 81 las penas tendrían que sumarse hasta el máximo de 35 años, y en lugar de los 40 años.

Finalmente, de todos los casos expuestos vemos que la acumulación de las penas realizadas en base al Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal se suma, independientemente de la clase de delitos sin distinguir si estos son sancionados con penas de prisión o reclusión, con la única limitación que son los cuarenta años. Y si tenemos en cuenta la acumulación de penas dadas conforme al Código Penal, esta acumulación se acercan más a lo que plasma la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a la finalidad de la rehabilitación social, pues las penas no se extienden más allá de la necesaria para que el sentenciado propenda a optar por su rehabilitación de acuerdo al sistema progresivo por los beneficios penitenciarios.

Es pues, el sistema de acumulación jurídica contemplada en el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal una acumulación aritmética disimulada al establecerse un límite máximo en cuarenta años, porque rebasa el proyecto de vida de una persona si se toma en consideración que la edad adulta va desde los 18 años a los 65.

Téngase en cuenta que en los casos analizados, si tomamos en consideración que en el supuesto de que a los treinta años de edad fue sentenciado esa persona, la pena integral la estaría cumpliendo a la edad de 70 años. Y en cuanto a los beneficios penitenciarios a los que aspiraría, al estar sentenciado con el Código Orgánico Integral Penal, del Régimen semiabierto tendría que esperar a cumplir el 60% de la penas que sería de 24



## Universidad de Cuenca

años, y al aplicársele al privado de la libertad, en el supuesto caso de tener 30 años, estaría cumpliendo con dicho requisito a los 64 años.

Caso distinto se daría si se le aplicará el sistema de acumulación de penas establecidas en el Código Penal en la que la pena máxima sería el de 35 años. Es decir si cometió el delito a los 30 años la pena integral la cumplirá a los 65 años y si bien la pena no es corta, sin embargo tendría la expectativa de acogerse al beneficio de prelibertad al cumplir el cuarenta por ciento de la pena, es decir al cumplir los 14 años de estar privado de libertad, por tanto estaríamos hablando que hubiese tenido la expectativa de acogerse al beneficio penitenciario de la prelibertad a la edad de 44 años, el mismo que es más apegado a la finalidad del sistema penitenciario contemplado en la Constitución, y por ende a la finalidad de la reinserción social.

Vemos entonces que el sistema de la acumulación de penas conforme al Código Orgánico Integral Penal es una suma exagerada y exorbitante de años que incluso supere la expectativa de vida de una persona, en cambio el Código de Ejecución de Penas y el Código Penal establecen límites máximos para el cumplimiento de las penas con el objetivo de mitigar efectos nocivos de la acumulación absoluta de las penas, pues un tema muy importante es tomar en consideración la rehabilitación, la reinserción y resocialización de la persona privada de la libertad, así como la finalidad de la pena en la que se justifica que el tiempo de prisión debe ser limitado; y sobre todo tener en cuenta, que el que está cumpliendo una pena es un ser humano que ha llegado ahí a lo mejor por la propia injusticia social promovido desde las esferas del propio poder del Estado.

De allí la importancia de tener políticas que tomen en consideración a la persona como ser viviente, que es sensible a los sufrimientos y desgracias que esa situación acarrea no solo en su persona, sino de su núcleo familiar; por ello abogamos que el tiempo que la persona privada de la libertad pueda recuperar su libertad debe tener como horizonte la reinserción social, la reeducación, buscando desterrar las penas inhumanas producto del desconocimiento doctrinario del Derecho Penal y la Criminología.



## **CONCLUSIONES.**

En este trabajo de investigación se analizó la eficacia de la finalidad rehabilitadora en los sentenciados con penas privativas de libertad acumulativas hasta cuarenta años, en la que se llegó a las siguientes conclusiones:

- En esta tesis se realizó un análisis comparativo de la acumulación de penas establecidas en el Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal y en el Art. 81 del Código Penal, lo que permitió determinar que la norma más beneficiosa para la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad según la Constitución, es la del Código Penal, que se encuentra





## Universidad de Cuenca

aplicando debido a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal.

- De acuerdo a las teorías analizadas la finalidad de la rehabilitación establecida en el Art. 201 de la Constitución de la República, se halla de acuerdo a la teoría relativa o utilitarista que busca la reinserción del privado de la libertad y por lo tanto busca la rehabilitación, en ella se aplican sus principios de favorabilidad y proporcionalidad; pero la acumulación de penas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, se aplica la teoría retribucionista o absoluta, en la que la pena esta desprovista de todo fin, pues el fin es la pena misma, por lo tanto existe un retroceso en cuanto a la rehabilitación.
- Al realizar la comparación de la acumulación de penas según el Art. 81 del Código Penal y la del Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal, la más beneficiosa resultó ser la del primer cuerpo de leyes que recoge el mandato constitucional del Art. 201 que consagra el derecho del privado de la libertad a la rehabilitación. La segunda acumulación dispuesta por la del Código Orgánico Integral Penal además de sumar todas las sanciones con el único límite de los cuarenta años, repercute gravemente en los tiempos para obtener los beneficios penitenciarios; y, ciertos casos, vista la expectativa de vida, sería como inútil e inalcanzable.
- En los casos prácticos analizados vemos que la acumulación de las penas realizadas en base al Art. 55 del Código Orgánico Integral Penal se realiza la acumulación jurídica de las penas en la que se suman las mismas, independientemente de la clase de delitos sin distinguir si estos son sancionados con penas de prisión o reclusión, con la única limitación que son los cuarenta años. Y si tenemos en cuenta la acumulación de penas dadas conforme al Art. 81 del Código Penal, esta acumulación se acercan más a lo que plasma el Art. 201 Constitución de la República del Ecuador en cuanto a la finalidad de la



rehabilitación social, pues las penas no se extienden más allá de la necesaria para que el sentenciado propenda a optar por su rehabilitación de acuerdo al sistema progresivo con los beneficios penitenciarios.

## **RECOMENDACIONES.**

Al finalizar esta investigación y en función de los resultados obtenidos se formulan las siguientes recomendaciones:

- ❖ Al Consejo de la Judicatura, designe a de los Jueces de Garantías Penitenciarias, lo que permitirá dar cumplimiento a que lo establece el numeral 3 del Art. 203 de la Constitución de la República, pues en la actualidad se encuentran a cargo los jueces de las Unidades Judiciales Penales en la ciudad de Cuenca, mediante las resoluciones 018-2014 emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, quienes realizarán el cómputo de la pena y la acumulación de penas, así como



todos los temas de garantías penitenciarias de la persona privada de la libertad sea el Juez de Garantías Penitenciarias.

- ❖ A las autoridades del Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Sur Turi, implementar políticas públicas y verdaderos programas destinados a la rehabilitación de los privados de la libertad en los que se den prioridad al trabajo y a la educación, para ello el centro penitenciario debe contar con el personal necesario y capacitado, además contar con talleres y espacios para que los reclusos laboren; lo cual permitirá una efectiva rehabilitación del reo y que este pueda reinsertarse en la sociedad.
- ❖ A las autoridades de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, fomentar el debate en la academia de las consecuencias de la pena privativa de libertad y de la acumulación de penas, e incentivar a los estudiantes para que realicen las prácticas preprofesionales y de vinculación con la comunidad con esta población penitenciaria que requieren de sus conocimientos y apoyo.

## BIBLIOGRAFÍA.

Ávila, R. (2018). *El experimento: El campo jurídico, el control social y la degradación humana en la cárcel*. Las dimensiones culturales del derecho, 244-258.

Ávila, R. (2015). *El Código Orgánico Integral Penal y Su Potencial Aplicación Garantista*. Código Orgánico Integral Penal hacia su mejor comprensión y aplicación. 20-36.

Ávila, R. (2013). *La (in) justicia en la democracia constitucional de derechos. Una mirada desde el Garantismo*. Quito – Ecuador: Ediciones Legales EDLE S.A.



## Universidad de Cuenca

Ávila, R. (2008). *El principio de legalidad vs el principio de proporcionalidad*. Serie y Justicia. 307-349.

Antolesei, F. (1960). *Manual de Derecho Procesal Penal. Parte General*. Buenos Aires Argentina. Editorial Hispano America.

Bernal, J. & Montealegre, E. (2013). *El proceso penal fundamentos constitucionales y Teoría General*. Bogotá Colombia: Universidad externado de Colombia. Sexta edición.

Beccaria, C. (1984). *De los delitos y las Penas*. Barcelona: Ediciones Orbis S.A.

Cañar, L. (2005). *Comentario al Código Penal de la República del Ecuador* (Primera ed.). Cuenca, Ecuador. Rocafuerte.

Código Orgánico Integral Penal. (10 de febrero de 2014). *Registro Oficial No. 180*. Quito Ecuador.

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (2006). *Registro Oficial No. 379*. 30 Julio 2001.

Código Penal. (1971). *Registro Oficial No. 147*. 22 Enero 1971.

Código Civil. (1970). *Suplemento del Registro Oficial No. 104*. 20 Noviembre

Constitución de la República del Ecuador (2008). *Registro Oficial No. 449*.

Convención Americana de Derechos Humanos (1969). San José. Costa Rica. 22 de noviembre.

Cuerda, A. (2011). *La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: Porque son inscontitucionales en España*. Madrid: Atelier.

Diccionario de la Lengua Española (1984) Vigésima Edición. Madrid. Talleres gráficos de la editorial Espasa – Calpe S.A.

Donna, E. (2017). *Teoría del delito y de la pena*. Buenos Aires Argentina. Astrea

Dorado, P. (1905). *De Criminología y Penalogía*. Madrid. Imprenta Antonio Marzo



## Universidad de Cuenca

Ferrajoli, L. (2009). *Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal* (Novena ed.).

Madrid, España: Trotta.

García, J. (2015). *La acumulación jurídica de penas*. Madrid: Artes gráficas del Centro Penitenciario Madrid.

García, R. (2014). *Código Orgánico Integral Penal comentado. Arts. 1 al 78 principios y parte general*. Segunda Edición. Quito, Ecuador. Latitud Cero Editores.

Galván, J. (2006). *La importancia del apoyo social para el bienestar*. Salud Mental. 68-74.

Iturralde, C. (2018). *La educación superior en las cárceles. Los primeros pasos del Ecuador*. Alteridad. 84-95.

Jakobs, G. (2008). *Nuevo concepto de Derecho Penal*. Universidad Autónoma de Madrid-España.

Labatut, G. (1979) *Derecho Penal*. Sexta Edición. Chile: Editorial Jurídica de Chile.

Levene, R. (1993). *Manual de derecho procesal penal*. 2da edición. Buenos Aires Argentina Ediciones Depalma.

López, Espín, García, et. al. (2007). *Derecho Constitucional*. Valencia- España. Tirant lo Blanch. Séptima Edición. Volumen I.

Martínez Huamán, R. (2016). *Sistema de sanciones penales en el ordenamiento jurídico peruano. Análisis comparativo con España*. Derecho Penal y Penitenciario. 613-656.

Morás, L. (2016). *Representaciones sociales del delito, retórica punitiva y (des) humanización carcelaria*. Fermentario No. 10, 1-21.

Muñoz Conde, F., & García, M. (2015). *Derecho Penal. Parte General* (8va. ed.). Valencia: Tirant lo blanch libros.

Oliver, G. (2012 ) web. [www.politicacriminal.cl/Vol\\_07/n\\_14/Vol7N14A1.pdf](http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_14/Vol7N14A1.pdf).



## Universidad de Cuenca

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966). El 16 de diciembre.
- Pacheco, J. (1888). *El Código Penal concordado y comentado*. Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Impresor de Cámara, de S.M, Don Edvaristo, S. Madrid- España.
- Pablos de Molina, A. (2015). *Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos*. Lima, Perú: Iuris Consulti. S.A.C.
- Prieto, L. (2008). *El juicio de ponderación constitucional*. Serie de Justicia y derechos Humanos. 85-123.
- Régimen Penal Ecuatoriano. (2007). Tomo II. Quito Ecuador. Ediciones Legales EDLE S.A.
- Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. (1955). Ginebra.
- Roxin, C. (1997). Derecho Penal. Parte General Tomo I Fundamentos. La estructura de la teoría del Delito. (Primera edición) Madrid. Civitas.
- Roxin, C. Polaino Navarrete, M & Polaíno Orts, M (2013). *Política Criminal y dogmática penal*. Lima, Perú. ARA editores E.I.R.L
- Sánchez, R. (2008). *El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia mexicana*. Serie Justicia y Derechos Humanos. 221-268.
- Sentencia Nro.002-18-PJO-CC, 2018.
- Soler, S. (1983). Derecho Penal Argentino. Tipográfica Editora Argentina S.A. Novena Edición Reimpresión. Buenos Aires Argentina.
- Villaverde, I. (2008). *La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad*. Serie de Justicia y Derechos Humanos. 175-187.
- Zaffaroni, E. (2008). *Derecho Penal. Parte General*. Segunda Edición. Buenos Aires- Argentina. Ediar.



Zambrano, A. (2014). *Estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal*.

*Referido al libro primero*. Parte general. Primera edición. Quito- Ecuador.

Corporación de estudios y publicaciones.



## **ANEXOS.**



Cuenca, 16 de Noviembre del 2018

Dra. Catalina Mendoza  
**DIRECTORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA  
DEL AZUAY.**  
Su despacho.

De mis consideraciones:


Dr. Luis Franklin Barahona Quizhpi, con un cordial saludo me dirijo a usted deseándole éxitos en sus funciones.

Como estudiante de la Maestría en Derecho Penal, para fines académicos solicito a su autoridad de la manera más comedida, se digne autorizar al Sr. Coordinador de la Unidad de Estudios Juridimétricos y Estadística Judicial se me confiera:

Los datos estadísticos de las causas ingresadas, respecto a: tipo de Acción: Garantías Penitenciarias; Asunto: computo de pena, acumulación de penas, unificación de pena y fijación de pena única, ingresadas a los dieciséis juzgados de la Unidad Judicial Penal de Cuenca durante el año 2017.

Por la favorable acogida que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,




Dr. Franklin Barahona Quizhpi

C.C. No. 0104032610

Correo Electrónico: dragonluisfranklin@yahoo.com



16-11-18  
15:12  




Código descarga documento  
firmado electrónicamente.

Oficio-DP01-EPJEJ-2018-0020-OF

TR: DP01-EXT-2018-07254

Cuenca, martes 20 de noviembre de 2018

**Asunto:** INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Luis Franklin Barahona Quizhpi

Presente.-

Luego de expresar un cordial saludo, me dirijo a usted en relación a oficio s/n de fecha 16 de noviembre de 2018, con el fin de proporcionar la información solicitada, concerniente a causas ingresadas por garantías jurisdiccionales en la Unidad Judicial Penal de Cuenca, durante el año 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

Asunto	Causas ingresadas
Cómputo de la pena	738
Acumulación de penas	0
Unificación de las penas	46
Fijación de pena única	0
<b>TOTAL</b>	<b>784</b>

Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE)  
Período de información: 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2018.

Esperando que la información proporcionada sirva de apoyo para el cumplimiento de sus objetivos académicos, suscribo.

Atentamente,

Ing. José Luis Iturralde Pesántez  
**Responsable de Coordinación**  
**Dirección Provincial de Azuay**

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AZUAY  
Manuel J. Calle 2-14 y Cornelio Merchán, Cuenca  
(07) 4134 506  
www.funcionjudicial.gob.ec

Justicia Independiente, ética y transparente

VERSIÓN IMPRESA DE DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Firmado por JOSE LUIS  
ITURRALDE PESANTEZ  
C=EC  
L=CUENCA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AZUAY  
Manuel J. Calle 2-14 y Cornelio Merchán, Cuenca  
(07) 4134 506  
[www.funcionjudicial.gob.ec](http://www.funcionjudicial.gob.ec)

Elaborado por: Ing. José Luis Iturralde Pesántez

Justicia Independiente, ética y transparente

VERSIÓN IMPRESA DE DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



## Universidad de Cuenca

Libro	No. proceso	Fla no	Materia	Acción	Asunto	Fecha sorteo
EXP	01283-2017-00014G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	03/01/2017
EXP	01283-2017-00076G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	04/01/2017
EXP	01283-2017-00085G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	04/01/2017
EXP	01283-2017-00086G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	04/01/2017
EXP	01283-2017-00087G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	04/01/2017
EXP	01283-2017-00099G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	05/01/2017
EXP	01283-2017-00125G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/01/2017
EXP	01283-2017-00127G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/01/2017
EXP	01283-2017-00128G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/01/2017
EXP	01283-2017-00163G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	09/01/2017
EXP	01283-2017-00201G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/01/2017
EXP	01283-2017-00210G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/01/2017
EXP	01283-2017-00211G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/01/2017
EXP	01283-2017-00212G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/01/2017
EXP	01283-2017-00213G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/01/2017
EXP	01283-2017-00215G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/01/2017
EXP	01283-2017-00223G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/01/2017
EXP	01283-2017-00225G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/01/2017
EXP	01283-2017-00228G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/01/2017
EXP	01283-2017-00229G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/01/2017
JUI	01283-2017-00267 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	02/02/2017
EXP	01283-2017-00279G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	13/01/2017
EXP	01283-2017-00284G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	13/01/2017
JUI	01283-2017-00294 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	06/02/2017
JUI	01283-2017-00310 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	09/02/2017
EXP	01283-2017-00312G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/01/2017
EXP	01283-2017-00342G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/01/2017
EXP	01283-2017-00360G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/01/2017
EXP	01283-2017-00372G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/01/2017
EXP	01283-2017-00373G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/01/2017
EXP	01283-2017-00379G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/01/2017
JUI	01283-2017-00385 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	20/02/2017
JUI	01283-2017-00402 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	21/02/2017
EXP	01283-2017-00412G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	19/01/2017
EXP	01283-2017-00425G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/01/2017
EXP	01283-2017-00490G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/01/2017
EXP	01283-2017-00491G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/01/2017
EXP	01283-2017-00492G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/01/2017
JUI	01283-2017-00493 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	06/03/2017
EXP	01283-2017-00493G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/01/2017
EXP	01283-2017-00494G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/01/2017
EXP	01283-2017-00507G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00508G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00523G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00535G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00540G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00541G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00546G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00547G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00548G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
EXP	01283-2017-00549G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/01/2017
JUI	01283-2017-00552 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	16/03/2017
EXP	01283-2017-00556G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	25/01/2017



EXP 01283-2017-00596G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	25/01/2017
EXP 01283-2017-00603G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	25/01/2017
EXP 01283-2017-00647G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	26/01/2017
EXP 01283-2017-00664G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/01/2017
JUI 01283-2017-00667 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	03/04/2017
EXP 01283-2017-00677G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/01/2017
EXP 01283-2017-00682G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/01/2017
JUI 01283-2017-00695 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	05/04/2017
EXP 01283-2017-00719G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	31/01/2017
EXP 01283-2017-00747G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	01/02/2017
EXP 01283-2017-00749G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	01/02/2017
EXP 01283-2017-00782G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	03/02/2017
EXP 01283-2017-00790G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	03/02/2017
EXP 01283-2017-00791G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	03/02/2017
EXP 01283-2017-00792G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	03/02/2017
JUI 01283-2017-00800 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	21/04/2017
EXP 01283-2017-00819G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/02/2017
EXP 01283-2017-00820G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/02/2017
EXP 01283-2017-00825G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	07/02/2017
EXP 01283-2017-00828G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	07/02/2017
EXP 01283-2017-00830G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	07/02/2017
EXP 01283-2017-00833G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	07/02/2017
JUI 01283-2017-00835 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	25/04/2017
EXP 01283-2017-00845G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	08/02/2017
EXP 01283-2017-00846G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	08/02/2017
EXP 01283-2017-00859G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	09/02/2017
EXP 01283-2017-00880G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	13/02/2017
EXP 01283-2017-00886G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	13/02/2017
JUI 01283-2017-00935 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	05/05/2017
EXP 01283-2017-00943G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/02/2017
EXP 01283-2017-00944G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/02/2017
EXP 01283-2017-00945G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/02/2017
EXP 01283-2017-00946G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/02/2017
EXP 01283-2017-00950G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/02/2017
EXP 01283-2017-00951G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/02/2017
EXP 01283-2017-00957G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/02/2017
EXP 01283-2017-01029G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/02/2017
EXP 01283-2017-01036G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/02/2017
EXP 01283-2017-01081G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/02/2017
EXP 01283-2017-01083G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/02/2017
EXP 01283-2017-01088G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/02/2017
EXP 01283-2017-01107G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/02/2017
EXP 01283-2017-01114G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/02/2017
EXP 01283-2017-01120G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/02/2017
JUI 01283-2017-01123 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	22/05/2017
EXP 01283-2017-01123G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/02/2017
EXP 01283-2017-01153G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/02/2017
EXP 01283-2017-01154G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/02/2017
EXP 01283-2017-01185G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/02/2017
EXP 01283-2017-01191G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/02/2017
EXP 01283-2017-01206G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/02/2017
EXP 01283-2017-01207G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/02/2017
EXP 01283-2017-01257G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	01/03/2017
EXP 01283-2017-01275G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	02/03/2017

EXP 01283-2017-01301G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	03/03/2017
EXP 01283-2017-01305G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	03/03/2017
JUI 01283-2017-01346 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	12/06/2017
EXP 01283-2017-01347G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/03/2017
EXP 01283-2017-01349G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/03/2017
EXP 01283-2017-01377G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	08/03/2017
EXP 01283-2017-01379G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	08/03/2017
JUI 01283-2017-01383 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	15/06/2017
EXP 01283-2017-01394G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	08/03/2017
EXP 01283-2017-01399G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	09/03/2017
EXP 01283-2017-01409G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	09/03/2017
EXP 01283-2017-01437G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/03/2017
EXP 01283-2017-01438G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/03/2017
EXP 01283-2017-01439G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/03/2017
EXP 01283-2017-01490G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	14/03/2017
EXP 01283-2017-01491G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	14/03/2017
EXP 01283-2017-01499G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	14/03/2017
EXP 01283-2017-01500G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	14/03/2017
EXP 01283-2017-01503G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/03/2017
EXP 01283-2017-01518G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/03/2017
JUI 01283-2017-01535 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	07/07/2017
JUI 01283-2017-01544 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	10/07/2017
EXP 01283-2017-01546G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/03/2017
EXP 01283-2017-01554G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/03/2017
JUI 01283-2017-01579 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	13/07/2017
EXP 01283-2017-01580G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/03/2017
EXP 01283-2017-01586G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/03/2017
JUI 01283-2017-01590 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	14/07/2017
JUI 01283-2017-01591 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	14/07/2017
EXP 01283-2017-01614G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/03/2017
EXP 01283-2017-01615G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/03/2017
EXP 01283-2017-01617G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/03/2017
EXP 01283-2017-01618G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/03/2017
EXP 01283-2017-01657G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/03/2017
EXP 01283-2017-01670G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/03/2017
EXP 01283-2017-01706G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/03/2017
EXP 01283-2017-01710G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/03/2017
EXP 01283-2017-01749G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/03/2017
JUI 01283-2017-01765 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	03/08/2017
EXP 01283-2017-01781G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/03/2017
JUI 01283-2017-01785 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	04/08/2017
EXP 01283-2017-01788G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	29/03/2017
EXP 01283-2017-01801G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	29/03/2017
JUI 01283-2017-01833 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	10/08/2017
EXP 01283-2017-01850G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	31/03/2017
EXP 01283-2017-01860G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	31/03/2017
EXP 01283-2017-01861G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	31/03/2017
JUI 01283-2017-01886 (1)	S	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/08/2017
EXP 01283-2017-01910G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	04/04/2017
JUI 01283-2017-01911 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	23/08/2017
EXP 01283-2017-01912G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	04/04/2017
EXP 01283-2017-01913G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	04/04/2017
EXP 01283-2017-01937G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	05/04/2017
EXP 01283-2017-01950G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	05/04/2017





## Universidad de Cuenca

EXP 01283-2017-01973G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/04/2017
EXP 01283-2017-01976G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/04/2017
EXP 01283-2017-01986G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	06/04/2017
EXP 01283-2017-02003G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	07/04/2017
EXP 01283-2017-02033G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/04/2017
EXP 01283-2017-02034G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/04/2017
EXP 01283-2017-02035G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/04/2017
EXP 01283-2017-02038G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/04/2017
EXP 01283-2017-02041G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/04/2017
EXP 01283-2017-02051G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/04/2017
EXP 01283-2017-02053G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/04/2017
EXP 01283-2017-02062G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/04/2017
EXP 01283-2017-02075G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/04/2017
EXP 01283-2017-02083G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/04/2017
EXP 01283-2017-02100G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	12/04/2017
EXP 01283-2017-02114G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	12/04/2017
EXP 01283-2017-02124G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	12/04/2017
JUI 01283-2017-02130 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	15/09/2017
EXP 01283-2017-02136G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	12/04/2017
EXP 01283-2017-02143G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	12/04/2017
JUI 01283-2017-02149 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	18/09/2017
JUI 01283-2017-02193 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	21/09/2017
EXP 01283-2017-02215G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/04/2017
EXP 01283-2017-02218G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/04/2017
EXP 01283-2017-02221G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/04/2017
EXP 01283-2017-02229G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/04/2017
EXP 01283-2017-02232G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/04/2017
EXP 01283-2017-02233G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/04/2017
EXP 01283-2017-02234G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/04/2017
EXP 01283-2017-02235G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/04/2017
EXP 01283-2017-02238G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	19/04/2017
JUI 01283-2017-02244 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	27/09/2017
EXP 01283-2017-02271G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	19/04/2017
EXP 01283-2017-02273G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	19/04/2017
EXP 01283-2017-02274G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/04/2017
JUI 01283-2017-02284 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	02/10/2017
JUI 01283-2017-02285 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	02/10/2017
JUI 01283-2017-02286 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	02/10/2017
JUI 01283-2017-02296 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	02/10/2017
EXP 01283-2017-02305G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/04/2017
EXP 01283-2017-02306G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/04/2017
EXP 01283-2017-02307G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/04/2017
JUI 01283-2017-02308 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	03/10/2017
EXP 01283-2017-02308G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/04/2017
EXP 01283-2017-02311G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/04/2017
JUI 01283-2017-02326 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	06/10/2017
EXP 01283-2017-02330G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/04/2017
EXP 01283-2017-02371G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/04/2017
EXP 01283-2017-02372G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/04/2017
EXP 01283-2017-02377G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/04/2017
EXP 01283-2017-02378G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/04/2017
EXP 01283-2017-02405G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	25/04/2017
EXP 01283-2017-02410G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	25/04/2017
JUI 01283-2017-02429 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/10/2017

EXP 01283-2017-02464G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	26/04/2017
EXP 01283-2017-02477G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	26/04/2017
EXP 01283-2017-02479G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	26/04/2017
EXP 01283-2017-02533G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/04/2017
JUI 01283-2017-02545 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	27/10/2017
EXP 01283-2017-02564G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/04/2017
EXP 01283-2017-02566G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/04/2017
JUI 01283-2017-02618 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	06/11/2017
EXP 01283-2017-02658G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	02/05/2017
JUI 01283-2017-02659 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	10/11/2017
EXP 01283-2017-02659G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	02/05/2017
EXP 01283-2017-02695G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	03/05/2017
EXP 01283-2017-02704G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	04/05/2017
JUI 01283-2017-02755 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	21/11/2017
JUI 01283-2017-02775 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	22/11/2017
EXP 01283-2017-02808G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	08/05/2017
EXP 01283-2017-02809G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	08/05/2017
JUI 01283-2017-02844 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	27/11/2017
JUI 01283-2017-02845 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	27/11/2017
JUI 01283-2017-02847 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	27/11/2017
JUI 01283-2017-02861 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	28/11/2017
JUI 01283-2017-02862 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	28/11/2017
EXP 01283-2017-02863G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	09/05/2017
EXP 01283-2017-02953G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/05/2017
EXP 01283-2017-02975G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/05/2017
EXP 01283-2017-02977G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/05/2017
EXP 01283-2017-02979G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	10/05/2017
EXP 01283-2017-02994G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/05/2017
EXP 01283-2017-02995G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	11/05/2017
EXP 01283-2017-03046G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	12/05/2017
EXP 01283-2017-03062G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	12/05/2017
JUI 01283-2017-03078 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	26/12/2017
JUI 01283-2017-03089 (1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 230 # 5	28/12/2017
EXP 01283-2017-03118G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	15/05/2017
EXP 01283-2017-03163G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/05/2017
EXP 01283-2017-03184G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/05/2017
EXP 01283-2017-03185G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/05/2017
EXP 01283-2017-03186G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	16/05/2017
EXP 01283-2017-03272G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/05/2017
EXP 01283-2017-03273G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	17/05/2017
EXP 01283-2017-03281G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/05/2017
EXP 01283-2017-03285G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/05/2017
EXP 01283-2017-03286G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/05/2017
EXP 01283-2017-03287G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/05/2017
EXP 01283-2017-03288G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	18/05/2017
EXP 01283-2017-03321G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	19/05/2017
EXP 01283-2017-03491G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/05/2017
EXP 01283-2017-03493G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/05/2017
EXP 01283-2017-03497G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/05/2017
EXP 01283-2017-03507G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/05/2017
EXP 01283-2017-03534G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	23/05/2017
EXP 01283-2017-03565G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/05/2017
EXP 01283-2017-03566G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/05/2017
EXP 01283-2017-03570G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	24/05/2017





Luis Franklin Barahona Quizhpi



Luis Franklin Barahona Quizhpi



Luis Franklin Barahona Quizhpi









[illegible]

pág. 104



Luis Franklin Barahona Quizhpi

EXP 01283-2017-11815G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/12/2017
EXP 01283-2017-11816G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	20/12/2017
EXP 01283-2017-11824G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/12/2017
EXP 01283-2017-11825G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/12/2017
EXP 01283-2017-11837G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	21/12/2017
EXP 01283-2017-11877G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/12/2017
EXP 01283-2017-11881G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/12/2017
EXP 01283-2017-11884G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/12/2017
EXP 01283-2017-11890G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	22/12/2017
EXP 01283-2017-11958G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	26/12/2017
EXP 01283-2017-11959G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	26/12/2017
EXP 01283-2017-11965G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	26/12/2017
EXP 01283-2017-12024G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/12/2017
EXP 01283-2017-12026G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/12/2017
EXP 01283-2017-12057G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/12/2017
EXP 01283-2017-12062G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	27/12/2017
EXP 01283-2017-12082G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/12/2017
EXP 01283-2017-12084G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/12/2017
EXP 01283-2017-12085G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/12/2017
EXP 01283-2017-12087G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/12/2017
EXP 01283-2017-12108G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/12/2017
EXP 01283-2017-12130G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/12/2017
EXP 01283-2017-12132G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/12/2017
EXP 01283-2017-12133G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	28/12/2017
EXP 01283-2017-12161G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	29/12/2017
EXP 01283-2017-12162G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	29/12/2017
EXP 01283-2017-12163G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	29/12/2017
EXP 01283-2017-12167G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	29/12/2017
EXP 01283-2017-12178G(1)	N	PENAL	GARANTÍAS	ART. 667 COIP	29/12/2017

Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE)

Período de información: 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017